



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

DIVISIÓN DE DERECHO, POLÍTICA Y GOBIERNO

MAESTRÍA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL

**EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN LA PROTECCIÓN
DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA EN EL PERIODO 2018-2024**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

MAESTRA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL

PRESENTA:

AKETZALLI JOCELIN DEBORA MALDONADO

Asesor de Tesis:

Dr. José Jesús Soriano Flores

Guanajuato, Guanajuato.

Octubre 2025

AGRADECIMIENTOS

Mi mayor agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad de Guanajuato y a todos los profesores que contribuyeron y me proporcionaron las herramientas que adquirí en ellas, y por haberme formado como la profesionista que soy.

A mi asesor el Doctor Jesús Soriano, por compartir sus conocimientos, por cada una de sus aportaciones, por su paciencia y sobre todo por confiar en mí y motivarme a cumplir con este logro.

A mis padres Paty y Juan, y a mi hermana Yetla, que siempre han creído en mí, me han apoyado e impulsado a lograr cada cosa que me he propuesto y que me enseñaron a siempre cuestionar mi realidad.

A todas las mujeres valientes e inteligentes que tengo la fortuna de llamar amigas, porque me acompañaron en esta y otras etapas y me motivaron a no perder de vista la meta que significó este posgrado.

ÍNDICE

Índice de Siglas y Abreviaturas.....	3
Introducción.....	4
Capítulo I: Marco conceptual e histórico en el contexto de los Derechos Humanos de las mujeres	7
1.1 Marco conceptual mínimo en materia de Derechos Humanos de las mujeres...8	
1.2 Marco histórico y contexto social mexicano de la lucha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.....	31
Capítulo II: Estándares Jurídicos Nacionales e Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.	43
2.1 Estándares Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y combate de la violencia contra la mujer.....	43
2.2 Estándares Nacionales: Marco Interno Mexicano en materia de violencia contra la mujer.....	63
2.3 Jurisprudencia Nacional relacionada con los derechos humanos de las mujeres.....	77
Capítulo III: Análisis Estadístico y comparativo.....	80
3.1 Análisis de la legislación y políticas mexicanas sobre violencia contra la mujer creadas en el periodo 2018-2024.....	80
3.2 Análisis estadístico para la verificación de la efectividad de las políticas públicas.....	95
Conclusiones.....	107
Bibliografía.....	113

INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLAS	SIGNIFICADO
ANUIES	Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CONAVIM	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
INE	Instituto Nacional Electoral
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LFPED	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
LGBTTTI+	Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual
LGAMVLV	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
OSAGI	Oficina del Consejero Especial en materia de Género y Adelantos de las Mujeres
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU MUJERES	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women/ Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
PAMIMH	Programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres
PIPASEV	Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, agencia de la Organización de las Naciones Unidas
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
INSTRAW	International Research and Training Institute for the Advancement of Women, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, precursora de ONU MUJERES.

*“Quiero disculparme con todas las mujeres
a las que he llamado bonitas
antes de haberlas llamado inteligentes o valientes.
Lamento si hice sonar complicado
algo tan simple como con lo que se nace,
es de lo que tienes que estar más orgullosa
como cuando tu espíritu ha aplastado las montañas.
De ahora en adelante, voy a decir cosas como eres resistente
o eres extraordinaria,
no porque crea que no eres bonita,
sino porque eres mucho más que eso.”
-Rupi Kaur*

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio y a lo largo de mi formación académica y profesional, he buscado generar un impacto positivo en la sociedad mexicana, razón por la que me he desempeñado profesionalmente, y he abordado temas de derechos humanos como lo son derechos de los migrantes, medio ambiente, y en esta ocasión, derechos de las mujeres.

Asimismo, el contexto social en el que viví la primera parte de mi vida, como joven, mujer no blanca habitando y estudiando en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, enfrentando la creciente inseguridad, violencia de género, y la vulneración de derechos en la cotidianeidad, así como el hecho de que las exigencias de los movimientos feministas y las organizaciones civiles han impactado en este ámbito son las razones personales para el desarrollo de este trabajo.

En cuanto a la perspectiva académica, dentro del marco jurídico mexicano existe un bloque constitucional que, conforme a lo expresado en el mismo, debe encontrarse armonizado con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que México se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como que ha firmado y ratificado diversos tratados y convenciones en la materia. Es por ello que resulta académicamente relevante el análisis y

evolución tanto de los derechos de las mujeres, como de los mecanismos constitucionales y legales existentes, para vislumbrar el ejercicio, protección y garantía efectiva de los mismos.

Históricamente la mujer ha sido objeto de discriminación en diversas formas, y la violación de sus derechos humanos constituye un obstáculo no solo para su desarrollo, sino para lograr una sociedad con plena igualdad y libertad. Desde los años setenta, tanto a raíz de la lucha de la sociedad civil como de esfuerzos de los gobiernos, ha habido avances en el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como el de eliminar la discriminación por motivos de género, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes e incluso, en los gobiernos recientes ha habido retrocesos en el logro de dichos objetivos, los casos de violencia por razón de género han ido al alta, debido tanto a que el discurso de altos funcionarios gubernamentales ha buscado invisibilizar y desprestigiar la lucha de la sociedad civil, así como que los ejes prioritarios del gobierno federal no incluyen esta problemática en su Plan Nacional de Desarrollo.

El Estado mexicano se ha comprometido internacionalmente a seguir una política encaminada a la eliminación de la discriminación de género, por los medios legales y políticos que sean necesarios y apropiados. No obstante lo anterior, la agenda del gobierno federal mexicano en el sexenio analizado, y en consecuencia sus esfuerzos por combatir este problema social, contrarios a la misión de diversos instrumentos internacionales firmados, al texto plasmado en el artículo primero de la constitución nacional, y a recomendaciones realizadas por organismos de protección de derechos humanos, ha sido omisa e incluso negligente al implementar las medidas necesarias en cada rama del gobierno, provocando un retroceso y agravamiento en la discriminación por razones de género, desigualdad e inequidad, y de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, no ha cumplido con la obligación de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Es por ello que el objetivo de la presente investigación es determinar si derivado de las leyes y políticas existen avances o retrocesos en materia de la eliminación de la

violencia contra la mujer y en consecuencia en la garantía efectiva del derecho a una vida libre de violencia durante el periodo de 2018 a 2024.

La presente investigación está planteada en tres capítulos, dentro de los cuales, en el primero se presentan y analizan los conceptos necesarios para analizar y comprender el problema planteado, así como los antecedentes históricos para comprender el contexto social, cultural y político de nuestro país; en el segundo capítulo se presenta el marco jurídico tanto nacional como internacional aplicable en materia de derechos humanos de las mujeres, y finalmente, en el capítulo tercero se analizarán las leyes y políticas públicas aprobadas e implementadas en el periodo analizado, así como una comparación entre los datos estadísticos de incidencia delictiva relacionada con violaciones a derechos humanos de las mujeres en el sexenio delimitado contrastándolo con datos anteriores, logrando entonces observar la efectividad o falta de ellas en dichas leyes y políticas.

CAPÍTULO 1

MARCO CONCEPTUAL E HISTÓRICO EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Los derechos humanos y el feminismo han tenido una relación histórica que ha permitido y propiciado la crítica al occidentalismo moderno que se ha caracterizado por la exclusión de las mujeres de espacios políticos, sociales, culturales y jurídicos, y han puesto el foco en la necesidad de reclamar la igualdad sustantiva de género partiendo desde la afirmación que puede parecer una obviedad, de que las mujeres también son seres humanos.

A partir del movimiento feminista es que se visibilizó e identificó la violencia de género para posteriormente clasificarla como una violación de derechos humanos¹. Como consecuencia de estos esfuerzos surgieron instrumentos internacionales como lo fue la Conferencia Mundial de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En el ámbito nacional, algunos países como lo es el nuestro, se impulsó la creación de leyes e instituciones en la materia, que ha pasado de referirse solo a la violencia como intrafamiliar o doméstica a mediados del siglo pasado, a reconocer, prevenir y sancionar otros tipos de violencia como lo es la violencia digital, la violencia política, y el feminicidio.

Sin embargo, estos avances no han sido suficientes, especialmente en un país como el nuestro, donde la cultura patriarcal se encuentra entramada en todos los ámbitos, y donde la importancia del problema de la violencia de género ha sido

¹ Lagarde M., *El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia*, p.5, consultado el 10 de abril de 2024 en https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf

desestimada causando un círculo vicioso en el que no se denuncia porque no se considera un problema social grave, y a su vez no se considera una problemática estructural por haber un subregistro de denuncias.

Es por ello que Organizaciones No Gubernamentales, sociedad civil organizada, académicas e investigadoras hemos considerado la importancia de trabajar desde cada uno de nuestros campos de acción para lograr el reconocimiento de la existencia de la violencia contra la mujer, e impulsar cambios que protejan y garanticen el goce de un derecho tan primordial como el de una vida libre de violencia.

A partir de lo anterior, este capítulo hace un recorrido tanto por la evolución tanto histórica como conceptual alrededor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

1.1 MARCO CONCEPTUAL MÍNIMO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

La investigación de problemas de derechos humanos es una actividad frecuente tanto en la academia, como en el periodismo y el activismo; sin importar el ángulo de dicho análisis, o su finalidad, es importante que para dicho estudio exista claridad y conocimiento previo de los conceptos que serán utilizados.

Por lo anterior en este capítulo se presentan los conceptos y diversas definiciones en materia de derechos humanos, considerados de mayor importancia para el desarrollo de esta investigación.

1.1.1 Derechos Humanos:

Toda definición moderna de derechos humanos parte de la idea del reconocimiento y respeto a la dignidad humana como su fundamento. Esta noción existía desde la Edad Moderna, aunque la misma ha cambiado de significado y sus implicaciones; ha pasado de considerarse simplemente como la posibilidad de cumplir

obligaciones frente al Estado, hasta llegar a la corriente iusnaturalista, la cual antepone el reconocimiento de esta dignidad humana a las actividades del Estado, es en esta etapa en la que los derechos pasan a representar un límite a la actividad estatal en favor de los individuos².

Jesús Rodríguez y Rodríguez en define los derechos humanos como el “conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente”³.

Por su parte, Antonio Truyol y Serranos afirma que “decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico- espiritual -que es el nuestro-, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados”⁴.

Desde la perspectiva de Manuel Peris “el concepto y formulación de los derechos humanos, se han ido decantando a través de la historia, a partir de núcleo teórico más amplio de humanidad, entendida ésta no en su apoyo sentimental, sino como un proceso de autoconciencia, mediante el cual se ha objetivado la esencia del hombre como un concepto unitario y abstracto”⁵.

Pérez Luño los definió en principio, como el “conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por todos los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”⁶, sin embargo en una revisión a su concepción, les atribuyó también una fundamentación iusnaturalista,

² Solís García, B. (2006). *Evolución De Los Derechos Humanos*, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p.p. 77-78.

³ Rodríguez y Rodríguez J., *Diccionario Jurídico Mexicano*, 2º Edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, 2004, p. 1268.

⁴ Truyol y Serra, A., *Los Derechos Humanos*, Madrid, Editorial Tecnos, 1979, p. 6.

⁵ Peris M., *Juez Estado y Derechos Humanos*, España, Editorial Fernando Torres, 1976, p. 135.

⁶ Pérez Luño A. E. *El concepto de los Derechos Humanos y su problemática actual*, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, p.179

en cuanto a que implican exigencias éticas de “deber ser” que legitiman su reivindicación donde no han sido reconocidas, al mismo tiempo que son categorías que no pueden desvincularse de los ordenamientos jurídicos; cuando la recepción de estas categorías, se habla de los derechos fundamentales, es decir, de aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico y positivo, principalmente en la normativa constitucional, y que goza de una tutela reforzada.⁷

Una definición sencilla y aceptada en lo general es que los derechos humanos son aquellos que poseemos las personas solo por existir, es decir, que son inherentes a la naturaleza humana; también se considera que existen sin importar dónde nos encontremos o de la sociedad de la que formemos parte, por lo que la labor del Estado es la de reconocer dichos derechos, así como proporcionar las garantías necesarias para su ejercicio y protección.

La evolución de los derechos humanos y de su definición ha sido un proceso lento que algunos consideran inició desde la Magna Carta de Juan sin tierra en 1215, hasta la actualidad; estos derechos han sido plasmados en diverso documentos y declaraciones y catálogos, los cuales fueron fruto en su mayoría, no de trabajo jurídico, sino de las exigencias sociales y de acontecimientos históricos como un esfuerzo para evitar la repetición de abusos y atrocidades.

Los derechos civiles fueron los primeros en ser reconocidos y son, en gran parte, los contenidos en las constituciones escritas -y algunas no escritas-, que reconocen principalmente el respeto a la vida, la libertad, la seguridad personal y el debido proceso: después llegaron lo políticos, como el derecho a tomar parte en el gobierno; los derechos económicos incluyen la libertad de trabajo, el derecho a la salud, alimentos, vestido y habitación entre otros. A principios del siglo XIX, se reconocieron los derechos sociales incluyendo el derecho al descanso y al ocio, al cuidado y asistencia de las infancias; finalmente los derechos culturales como la educación, a participar en la vida cultural, las artes y el avance científico⁸.

⁷ *Idem.* p. 180

⁸ Fix-Zamudio, H., Carrillo Flores, Antonio, *La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos*. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, 1983, número 8, p. 196-198.

Todo lo anterior quiere decir que, al hablar de derechos humanos, los entenderemos como aquellos derechos que se tienen por el simple derecho de vivir, y que las constituciones e instrumentos jurídicos simplemente reconocen a fin de proporcionar las garantías de su ejercicio y protección.

Es importante anticipar que el marco jurídico mexicano tiene el fundamento de los derechos humanos en el artículo 1° constitucional que establece que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”⁹.

1.1.2 Derechos De Las Mujeres:

Desde la perspectiva feminista de Marcela Lagarde, los derechos humanos de las mujeres surgieron en países occidentales modernos, lo que ha causado que, en la confrontación entre Oriente y Occidente, los mismos sean considerados como occidentalizantes, y por ende han sido rechazados por líderes religiosos¹⁰; es por ese origen, relacionado con el colonialismo e imperialismo de Occidente, que ella considera que existe una errónea presentación de los derechos de las mujeres como privilegios y no como derechos, y se hace creer que, en lugar de que las mujeres puedan aspirar a gozar de derechos modernos que impregnen el género, se tiende a rechazarlos como privilegios de clase, género o edad, y desde este punto de vista se llega a afirmar que los derechos al ser humanos, significa que las mujeres, ya los tenemos¹¹.

⁹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°, 5 de febrero de 1917, consultada el 23 de enero de 2024 en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

¹⁰ Lagarde M., *El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia*, p.1, consultado el 10 de abril de 2024 en https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf

¹¹ *Ibidem* p. 3.

Al hablar de derechos de la mujer, se hace referencia a los derechos humanos que se promulgan y aplican concretamente a las mujeres en función de su condición, es decir de la específica diferencia con el varón. Es por dichas distinciones que el reconocimiento de estos derechos incluye principios y valores para la expedición de normas positivas que protejan su condición, incluyendo acciones afirmativas para lograr la paridad normativa. Lo anterior quiere decir que más que haber un catálogo específico de derechos propios de las mujeres por razón de su sexo, se trata de reconocer estas diferencias y el derecho de las mujeres a la igualdad en el trato normativo.¹²

De la misma manera en que los diversos derechos humanos no fueron reconocidos sino a raíz de los reclamos sociales, hasta inicios de este siglo la mujer no se tenía en cuenta, y era objeto de violencia, opresión y discriminación de forma cotidiana. Es por ello que los derechos de las mujeres se incluyeron en el marco de los derechos humanos recientemente a fin de incorporar estos aspectos de vulneraciones relativas al género para proteger mejor a las mujeres.¹³

El derecho internacional de los derechos humanos señala que:

Las mujeres (incluidas las niñas y las adolescentes) tienen el derecho al disfrute, en igualdad de condiciones, de las mismas oportunidades y los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que los hombres, y poder llevar una vida libre de violencia y discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio y una garantía fundamental de las Naciones Unidas, siendo uno de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Los Estados tienen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra las

¹² Mondragón Herrada C. *El Avance de los Derechos de las Mujeres*, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado el 22 de enero de 2024 en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3101/13.pdf>

¹³ United Nations, *Los derechos de la mujer son derechos humanos*, Publicación de las Naciones Unidas, Ginebra, 2015, p.1 consultado el 10 de enero de 2024 en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf

mujeres, tomar las medidas necesarias para este fin e incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones políticas y acciones.¹⁴

De las definiciones anteriores se entiende que, si bien entre hombres y mujeres rige el principio de igualdad, para que este principio y derecho pueda ser efectivamente ejercido, también es necesario nombrar y reconocer las desigualdades históricas de las que el género femenino ha sido víctima, razón por la cual la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales, establecen derechos y garantías para eliminar estas desigualdades, y así lograr la igualdad real y efectiva.

1.1.3 Igualdad De Género:

La OSAGI (Oficina del Consejero Especial en materia de Género y Adelantos de las Mujeres) define la igualdad de género como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres”¹⁵.

La igualdad de género para UNICEF significa que, mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar por igual, de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones¹⁶. En contraste con este ideal, se observa que la realidad que mujeres y niñas aún se enfrentan a desigualdades históricas por razón de su género.

¹⁴ Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, *Los Derechos Humanos de las Mujeres y el Enfoque de Género*, 2022, p. 1

¹⁵ Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI) *Conceptos y Definiciones*, ONU Mujeres, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>

¹⁶ UNICEF América Latina y el Caribe, *Igualdad de Género*, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero>

La UNESCO define la igualdad de género como “la situación en la que las mujeres y hombres gozan de la misma condición y tienen las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos humanos y su potencial a fin de contribuir al desarrollo nacional, político, económico, social y cultural y de beneficiarse de sus resultados”¹⁷.

Sin embargo, las Naciones Unidas prefieren el uso del término “igualdad de género” sobre el de equidad, dado que el segundo denota un elemento de interpretación de justicia social, usualmente basado en costumbres y tradiciones, religión o cultura, que es frecuentemente, en detrimento de las mujeres.

La igualdad tiene dos formas; la primera es la igualdad formal, que conforme a las Recomendaciones Generales N° 28 y N° 25 de la CEDAW, se conoce también como igualdad de derecho, que es que los Estados tienen la obligación de tratar legalmente a hombres y mujeres de igual manera, principalmente en cuanto al contenido de las leyes y su aplicación¹⁸. Por su parte la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad de hecho, que el Estado también debe garantizar, creando las condiciones necesarias para que las mujeres disfruten de todos sus derechos¹⁹.

1.1.4 Discriminación Por Razones De Género:

La CEDAW define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas

¹⁷ UNESCO, *Educación y Género*, 2019, consultado el 24 de enero de 2024 en https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_y_genero_20190525.pdf

¹⁸ CEDAW, *Recomendación General 28*, 2010, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendacion-general-28>

¹⁹ CEDAW, *Recomendación General no. 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer referente a medidas especiales de carácter temporal*, 2004, consultado el 24 de enero de 2024 en [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20\(Spanish\).pdf](https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf)

política, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (*CEDAW artículo 1*). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace distinción entre discriminación directa e indirecta:

“Se produce discriminación directa cuando la diferencia de trato se funda directa y expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y en características del hombre y de la mujer que no pueden justificarse objetivamente. Se produce discriminación indirecta cuando la ley, el principio o el programa no tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación”²⁰.

Por último, podemos hablar de discriminación interseccional o interseccionalidad en la situación en la que varios motivos actúan e interactúan entre sí al mismo tiempo, de tal manera que son inseparables y dan lugar a tipos particulares de discriminación²¹.

La discriminación y desigualdad puede darse de distintas formas; es discriminación *de iure* cuando leyes o políticas imponen restricciones o preferencias a determinados grupos, en este caso, las mujeres; por otra parte, cuando estas leyes y políticas aparentan ser neutras en cuanto a género, pero conllevan efectos adversos para las mujeres, se habla de discriminación *de facto*²².

Al comprender la complejidad y profundidad del problema de la desigualdad y discriminación por motivos de género, surge la necesidad y el enfoque de los gobiernos estatales de emprender esfuerzos políticos y jurídicos cuya misión es la eliminación todas y cualquier forma de discriminación, como camino a la consecución de la igualdad.

²⁰ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observancia General N°16*, 2005.

²¹ Unión Europea, Informe “*La Interseccionalidad de la discriminación por razones de raza, etnia y género*”, Madrid, 2022, p. 16 consultado el 24 de enero de 2024 en https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/I_Interseccionalidad_ES.pdf

²² Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), *Conceptos importantes concernientes al Género*, p. 1 consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf>

1.1.5 Género:

El concepto de género necesita entenderse claramente como una variable transversal sociocultural, como ya se adelantó en los párrafos anteriores. Es una variable global en el sentido de que el género también puede aplicarse a otras variables transversales como lo son la raza, clase social, grupo étnico, etc. ²³ “Los sistemas de género se establecen en diferentes contextos socioculturales, los cuales determinan lo que es esperado, permitido y valorado en un hombre y una mujer, en una niña y en un niño en estos contextos específicos. Los roles de género son aprendidos a través de procesos de socialización; no son fijos sino cambiantes. Los sistemas de géneros son institucionalizados a través de sistemas educativos, políticos y económicos, legislación, cultura y tradiciones. Al utilizar la perspectiva de género nos enfocamos no en los hombres y mujeres de forma individual, sino en el sistema que determina los roles y responsabilidades de género, el acceso y control de recursos, y el potencial de toma de decisiones”²⁴.

Es necesario señalar la diferencia entre género y sexo, pues en algunas ocasiones se usan como sinónimos cuando no lo son; como ya establecimos, el género se refiere a características que una sociedad en un determinado contexto, otorga o identifica con cada uno de los sexos; por su parte, el sexo lo concebimos y se refiere a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que nos definen como hombres y mujeres, es decir, que es determinado por la naturaleza.

Existen cuatro criterios para definir el sexo de una persona: el cromosómico que se refiere al sistema XX para el caso de las mujeres y XY para los hombres, el criterio gonadal, es decir a la presencia de ovarios o testículos; genital, concerniente a los órganos sexuales externos, y hormonal, cuando se analiza la concentración de progesterona y estrógeno para mujeres, y de andrógenos para los hombres²⁵.

²³ Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos Op. Cit. p.1

²⁴ Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), Op. Cit.

²⁵ SCJN, *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género*, Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN, México, 2020, p.3.

La asignación tanto del sexo como del género se hace al momento del nacimiento, pues el anuncio del personal médico de que alguien es niña o niño, al mismo tiempo que determina el sexo, también inaugura el género, generando las expectativas sobre el rol de género que jugará en la vida la persona.

Se puede hacer referencia al género para hablar tanto hombres como mujeres, y así mismo, a las relaciones entre ellos. Por género entenderemos entonces, para efecto de esta investigación, a las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, a las percepciones y a los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad.

1.1.6 Violencia Contra La Mujer:

La violencia de género es de las mayores y más claras manifestaciones de desigualdad, y se basa en la diferencia subjetiva que culturalmente se afirma que hay entre los sexos; esto significa que las mujeres son violentadas por el mero hecho de ser mujeres.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, contiene una definición de violencia que sintetiza el pensamiento feminista y ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo: "...por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada"²⁶.

La Ley Orgánica 1/2004 sobre Protección Integral contra la Violencia de Género de España establece que es "todo acto de violencia (...) que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan

²⁶ Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, artículo 1, de la resolución A/RES/48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993.

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (...) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que amenaza la igualdad, la seguridad jurídica, y otros derechos humanos, por lo que es el Estado quien tiene la responsabilidad de proteger a las mujeres de esta violencia, e incluso de los malos tratos en el seno del núcleo familiar.

1.1.7 Violencia De Género:

Esta se refiere a los actos dañinos dirigidos a una persona o grupo de personas en razón de su género; por lo anterior, aunque son las mujeres y niñas el blanco más común de este tipo de violencia, los hombres y niños también pueden ser objeto de este tipo de violencia, en el caso de la violencia relacionada con las normas de masculinidad/ feminidad, dirigida especialmente a la población LGBTTI+.

Se produce cuando se cometen actos violentos contra mujeres y personas de la comunidad LGBTTI+ debido a su orientación, identidad de género o características sexuales ²⁷.

1.1.8 Tipos Y Modalidades De Violencia De Género:

La CONAVIM clasifica las modalidades en que se presenta la violencia contra las mujeres de la siguiente manera:

²⁷ Amnistía internacional, *¿Cómo se violan los derechos de las mujeres?*, Derechos de las Mujeres, consultado el 28 de marzo de 2024 en <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/womens-rights/#:~:text=%C2%A1Los%20derechos%20de%20las%20mujeres%20son%20derechos%20humanos!&text=Entre%20ellos%20est%C3%A1n%20los%20relativos,salario%20por%20el%20mismo%20trabajo.>

Violencia Familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres²⁸.

La *violencia institucional* se refiere esencialmente al hecho de violencia cometido en el desempeño de sus funciones en una institución pública, o tolerancia u omisión de evitar un acto discriminatorio, o negligencia en atención debida de casos de violencia de género.

A estas modalidades el Instituto Chihuahuense de las Mujeres añade la *violencia política*, que se refiere a la acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tiene por

²⁸ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, *¿Qué es la violencia contra las mujeres y sus modalidades?*, 2016, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-contra-las-mujeres-y-sus-modalidades>

objeto o resultado limitar o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres²⁹.

La *violencia en el ámbito laboral* refuerza su exclusión del espacio profesional y afecta negativamente las posibilidades de las mujeres de tener recursos propios; esta se puede definir como “los actos y/o omisiones que las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima ejercen, independientemente de la relación jerárquica³⁰; este puede consistir en un acto u omisión en abuso del poder, y puede consistir en un solo evento o en una serie de ellos, dentro de los que se incluye el acoso y el hostigamiento.

El acoso laboral tiene como objetivo intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir, que suele presentar el hostigador; en cuanto a su tipología, se presenta en 3 niveles:

- a) Horizontal: Cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente del trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional.
- b) Vertical descendente. Sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima.
- c) Vertical ascendente. Ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.³¹

Esta violencia suele presentarse de forma sistémica como una serie de actos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, y que puede variar entre la exclusión total de la realización de cualquier labor asignada a la víctima,

²⁹ Instituto Chihuahuense de las Mujeres, *Tipos y Modalidades de Violencia contra la Mujer*, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/tipos-y-modalidades-de-violencia-contra-las-mujeres/>

³⁰ INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 30 de agosto de 2022, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf

³¹ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, *Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo*, México, 2020, p. 10.

agresiones verbales, excesiva carga de trabajo por desempeñar, siempre que se merme la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima.

El *acoso laboral* es una forma de violencia que se presenta como eventos que buscan intimidar, excluir, opacar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima causando daño físico, psicológico, económico y laboral- profesional.³²

Por su parte, la *violencia docente* se refiere a conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por razón de sexo, edad, condición social, académica, características físicas, infligidas por los maestros³³.

En cuanto a los tipos de violencia, *ONU MUJERES* los divide en:

- I. *Violencia económica*: consisten en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.
- II. *Violencia psicológica*: Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a la persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, familia, escuela o trabajo.
- III. *Violencia emocional*: Cosiste en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal.
- IV. *Violencia física*: Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja con golpes, patadas, bofetadas, denegándole atención médica, empleando otro tipo de fuerza en su contra, e incluso daños a la propiedad.

³² Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Op. Cit. p. 11.

³³ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, México, 2007, artículo 11.

- V. *Violencia sexual*: Se entiende cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que esta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental, o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por el efecto del alcohol o las drogas³⁴.

Lucía Núñez habla de la *violencia vicaria* como la situación en que se “violenta a través de una persona, en este caso a hijas, hijos e hijes, para dañar a la madre, o sea, hay un medio a través del cual se perpetúa, por lo que no es directa”³⁵, generalmente se presenta en momentos de separación, y es perpetrada por el progenitor; también plantea que este tipo de violencia no se da de forma aislada, sino que se concatena con otras como lo son la psicológica, la física, económica y patrimonial.

En una propuesta de reforma de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México la definen como “la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer, o dañar el vínculo afectivo, ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier tipo a ella y a sus hijas e hijos, así como desencadenar el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor”³⁶.

³⁴ ONU Mujeres, *Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas*, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fags/types-of-violence>

³⁵ Valencia I. et. al., *La violencia vicaria y sus lagunas legales*, UNAM Global TV, México, noviembre 2023, consultado el 23 de julio de 2024 en https://unamglobal.unam.mx/global_tv/la-violencia-vicaria-y-sus-lagunas-legales/

³⁶ Congreso de la Ciudad de México, *Comisión de Congreso CDMX reconoce violencia vicaria en ley*, Ciudad de México, 2023, consultado el 23 de julio de 2024 en <https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-comision-congreso-cdmx-reconoce-violencia-vicaria-ley-3935-1.html>

En esta misma ley se habla de la *violencia contra los derechos reproductivos* como “toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como acceso a servicios de aborto seguro en el marco normativo para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal y servicios obstétricos de emergencia” y también se define a la *violencia simbólica* como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”³⁷.

Violencia Obstétrica: Es una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privado, que consisten en cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico a la mujer.³⁸ La *violencia obstétrica física* se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la paciente, o cuando no se respetan los tiempos ni posibilidades del parto biológico; por su parte, la *violencia obstétrica psicológica* se refiere al trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante hacia la mujer cuando pide asesoramiento o requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica, y comprende también la omisión de información sobre la evolución del parto³⁹.

Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son las prácticas invasivas como las cesáreas sin justificación, la esterilización forzada o no consentida, el suministro injustificado de medicamentos, retraso en la atención médica de urgencia o falta de

³⁷ Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, *Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Ciudad de México, 2008, artículo 7.

³⁸ Grupo de Información en Reproducción Elegida, *Entidades que Penalizan la Violencia Obstétrica*, México, 2018, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://gire.org.mx/plataforma/entidades-que-penalizan-la-violencia-obstetrica/>

³⁹ Salomón & Warner Asociación Civil, *Violencia Obstétrica*, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, México, consultado el 19 de mayo de 2024 en http://www.conamed.gob.mx/cmam/pdf/violencia_obstetrica.pdf

respeto en tiempos del parto, trato discriminatorio, uso de lenguaje ofensivo o sarcástico y trato deshumanizado⁴⁰.

En años recientes, ha surgido un nuevo tipo de violencia, que es la *violencia digital*, que se refiere a los actos cometidos, asistidos o agravados por el uso de las tecnologías de información y comunicaciones contra la mujer; esta violencia se presenta en forma de ciber acoso, sexteo sin consentimiento, *doxing*, entre otras.

También se han identificado manifestaciones de violencia cotidianas que se han denominado *micromachismos*, esto porque se han normalizado en la vida diaria, es decir que se trata a formas socialmente legitimadas de violencia, pues existe un arraigo en la convivencia social; ejemplos de este tipo de violencia es el *mansplaining* – que se refiere a la situación en la que un hombre, explica a una mujer un tema sin importar o sin tener en cuenta que la mujer receptora de la explicación posea más conocimiento del tema - y el *manterrupting* – que se presenta cuando una mujer está expresando alguna idea y es interrumpida por un hombre para tomar control de la conversación – en ambas situaciones se observa que se subestima la capacidad o conocimiento de la mujer para discutir sobre un tema.

Como se puede observar, la violencia contra la mujer abarca diversos ámbitos y formas, sin importar si es en espacios públicos o privados, el rol que se encuentren desempeñando en la familia o en la sociedad, y puede provenir de diferentes “autoridades” o superiores incluyendo simplemente la superioridad en fuerza física; cualquiera que sea la forma o lugar donde se lleven a cabo estos actos, ninguno deja de representar un obstáculo a la igualdad, y se debe de tener en cuenta que mientras no se logre la erradicación de estas prácticas, la mitad de la sociedad sufre de manera sistémica de violaciones a los derechos humanos más básicos.

De lo anteriormente conceptualizado se observa que la violencia contra la mujer se presenta en los ámbitos público y privado, familiar, laboral, social y cultural, y que tiene múltiples formas y grados en las que se presenta, pero que todas ellas significan un decremento en el goce de otros derechos como lo son el derecho a la

⁴⁰ Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), *Salud Reproductiva*, consultado el 19 de mayo 2024 en <https://gire.org.mx/salud-reproductiva/>

vida, a la seguridad, al trabajo, a la educación, a la participación en la vida pública, derechos reproductivos y derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y en general a una vida digna y en condiciones de igualdad en relación a los hombres.

1.1.9 Femicidio:

Este término hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón provoca la muerte de una mujer o niña, por ser del sexo femenino. La diferencia con otros tipos de asesinato es que suelen ocurrir como consecuencia de violencia de género. Este concepto está en disputa dado que hay autores que afirman que cualquier asesinato cuya víctima sea mujer debe ser incluido, sin importar la motivación ni el género del perpetrador.

Es de importancia mencionar que el término “femicidio” fue introducido por la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, quien se basó por la versión en inglés de la estadounidense Diana Russell, que hace referencia a la culminación de todas las violencias cometidas contra las mujeres, desde la más mínima, pero que desembocan en quitarles la vida⁴¹.

El femicidio es la manifestación más extrema del abuso y violencia de hombres contra mujeres⁴². En general se entiende como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o mujer.

Se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo. Existen diferencias específicas entre el femicidio y el asesinato de hombres; en la mayoría

⁴¹ Mejía, V., *Cinco datos que debes saber sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM, consultado el 03 de marzo de 2024 en <https://coordinaciongenero.unam.mx/2022/02/cinco-datos-que-debes-saber-sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/#:~:text=En%202007%2C%20feministas%20mexicanas%2C%20entre,ejercida%20en%20todas%20sus%20formas.>

⁴² Torres A., *Femicidio (asesinatos a mujeres): definición, tipos y causas*, Barcelona, 2017, en <https://psicologiymente.com/forense/femicidio>

de los casos, quienes cometen feminicidios son parejas o ex parejas de la víctima, y suponen la culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidación⁴³.

1.1.10 Perspectiva De Género:

UNICEF la define como una categoría analítica que toma los estudios que surgen de distintas vertientes académicas de los feminismos para, desde esta plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5°, fracción VI la define como “ la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

En la LGAMVLV se considera que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres⁴⁴.

Es una forma de observar la realidad con base en el sexo y género, con sus manifestaciones en el contexto geográfico, étnico e histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y

⁴³ *Idem*.

⁴⁴ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, septiembre 14, 2021, de Diario Oficial de la Federación 2021 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf

desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación mayoritariamente hacia las mujeres.

Todo lo anterior quiere decir que la perspectiva de género consiste en la concientización de las diferencias estructurales entre hombres y mujeres, el impacto social que estas diferencias ha tenido en el mundo, para entonces tomar las acciones políticas, jurídicas, sociales, culturales, o de la índole que sea, necesarias encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Usualmente al aplicar la perspectiva de género, es común incorporar o identificar algunas otras categorías que son objeto de discriminación, como lo son la edad, clase, etnia, etc., con lo que es posible conocer la discriminación diferenciada cuando dos o más de estas categorías sospechosas se combinan.

1.1.11 Empoderamiento De Las Mujeres:

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) en el artículo 5 fracción X, lo define como “un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades⁴⁵.

Hace alusión al término acuñado por los movimientos feministas y de mujeres para describir el proceso de toma de conciencia de género, así como para la toma de posición con respecto al poder en sociedades patriarcales y el accionar personal y colectivo que les conduzca a diseñar formas alternativas para su ejercicio.

También puede definirse como el proceso que experimentan individual y colectivamente los seres humanos que sufren discriminación, entre ellos las mujeres, en el cual adquieren valoración de sí mismas, conocimientos, destrezas y

⁴⁵*Ibidem.*

habilidades que les permiten, gradualmente, decidir su propio destino. Tiene como objetivo central que las mujeres amplíen su poder relativo frente al hombre⁴⁶.

El inicio de este proceso, como se explicará en la siguiente parte del capítulo, tuvo sus inicios desde hace más de un siglo, y en el caso mexicano, a partir de la época revolucionaria; sin embargo, este movimiento ha encontrado resistencia a sus exigencias y ha avanzado a marchas forzadas, por lo que no se trata de un proceso terminado o que haya completado su cometido.

1.1.12 Feminismo:

Se refiere al movimiento político, social académico, económico y cultural que busca crear conciencia para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres.

Nuria Varela lo define como un discurso político que se basa en la justicia (...) es una teoría y práctica articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres, y deciden organizarse para acabar con ellas. El feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social⁴⁷.

Por su parte Victoria Sau lo define como “movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las

⁴⁶ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (s.f.). *Glosario de términos sobre género y derechos humanos*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021 Consultada el 20 de noviembre de 2023 en: https://catedraunescohdh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/2_genero/13.pdf

⁴⁷ Varela N., *Feminismo para Principiantes*, Barcelona, Ediciones B.S.A., 2008, p. 9

mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera⁴⁸.

Para Ana de Miguel Álvarez no existe un solo feminismo sino diversos tipos de éste, y las ubica históricamente de la siguiente manera:

- a) Premoderno: Desde el esclavismo hasta el inicio del capitalismo y la irrupción de la Revolución Francesa en 1789.
- b) Moderno: A partir de la organización de la Sociedad de Mujeres Republicanas evolucionarias dirigidas por Olimpia de Gauges; también es conocido como feminismo decimonónico.
- c) Feminismo socialista utópico: establecido en el siglo XIX, dotado de un carácter internacional ⁴⁹.

Para Marcela Lagarde y algunas otras, el aporte del feminismo a los derechos humanos versa de la tesis que reconoce a los seres humanos tanto hombres como mujeres como equivalentes y como sujetos de derechos humanos⁵⁰. La relación e importancia de este pensamiento con los derechos humanos es la atención que ha puesto a la exclusión de las mujeres de espacios políticos, sociales y jurídicos.

Uno de los esfuerzos más significativos del feminismo es el de la visibilización de la violencia, para identificarla, denunciarla y hacerla un problema de la democracia, para que su eliminación sea un asunto de los regímenes democráticos⁵¹.

Ya sea que nos refiramos al aspecto teórico, al político, o al social del feminismo, es claro que se trata de una respuesta y al mismo tiempo la búsqueda de la solución a las desigualdades a las que histórica y culturalmente las mujeres nos hemos enfrentado.

⁴⁸ Mujeres en Red, *¿Qué es el feminismo?*, Mujeres en Red, El periódico Feminista, consultado el 25 de enero de 2024 en <https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1308>

⁴⁹ Galeana, P. presentadora, *Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, pp. 245- 248.

⁵⁰ Lagarde M., *Cit. p. 4*

⁵¹ Lagarde M., *Cit. p. 5*

1.1.13 Patriarcado o Sistema Patriarcal:

Cuando hablamos del sistema patriarcal, nos referimos al desbalance que existe entre mujeres y hombres en la sociedad, esto es, un orden social basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo con el poder en el que las mujeres se encuentran subordinadas a los hombres en tanto son percibidas como desiguales e incluso inferiores⁵².

Es la forma de organización social específica basada en la dominación del hombre con ejercicio de poder sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como sobre otros hombres de menos jerarquía en la sociedad⁵³. Los elementos del sistema patriarcal que determinan el orden jerárquico son condiciones como la edad, grado de estudios, etnicidad, nacionalidad, orientación e identidad sexual entre otros.

Es también el conjunto de estructuras socioeconómicas y políticas cuya función es la de mantener y perpetuar los roles tradicionales masculino y femenino, así como lo que tradicionalmente es atribuido a mujeres y hombres⁵⁴.

Lo anterior se sustenta en: a) la superestructura cultural (normas y valores de la sociedad), b) las instituciones (sistemas de protección de la familia, la educación, el empleo, etc.), y c) los procesos de socialización⁵⁵.

Al introducir este conjunto de conceptos y sus definiciones se espera proporcionar el conocimiento necesario para entender la importancia e impacto que tiene la violencia contra las mujeres tanto en la familia, como en la sociedad y en la evolución y desarrollo mundial; se busca que se observe con una nueva perspectiva la violencia, para entender la urgencia de emprender acciones, no solo desde los reclamos de la sociedad civil organizada, sino que los gobiernos asuman la responsabilidad que tienen de impulsar cambios estructurales en una sociedad

⁵² Lagarde, M. (1997), *Género y Feminismo. Desarrollo Humano y democracia*, 2a. ed., Madrid, Grafistaff. p.p 50-52.

⁵³ UNICEF, *Comunicación, Infancia y Adolescencia Guía para periodistas*, Argentina, 2007, p. 13.

⁵⁴ Secretaría Técnica del Proyecto Equal "En Clave de Culturas", *Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género*, 2021 Consultado el 10 <https://www.um.es/documents/2187255/2187771/glosario-terminos.pdf/34c77283-cc4c-44b9-9fc5-09142baf9386>

⁵⁵ Secretaría Técnica del Proyecto Equal "En Clave de Culturas", *Cit.*

profundamente machista y patriarcal, donde la violencia de género es normalizada, causando que para más de la mitad de la población, el riesgo de ser violentado sea una preocupación cotidiana, afectando no solo al derecho a la igualdad y a la seguridad, sino el disfrute de otros derechos conexos como la educación, el trabajo, la libertad de expresión y reunión, e incluso el libre desarrollo de la personalidad. Se trata de una ideología heredada que presupone la superioridad masculina, y que ha constituido la base para que se cometan actos de violencia contra la mujer.

Por ello es imperativo que se cuestione y modifique esta ideología, si es que buscamos que tanto hombres como mujeres sean capaces de hacer vales sus derechos y libertades en igual medida, y crear una sociedad que proteja y respete a las mujeres en vez de violentarlas y menospreciarlas.

1.2 MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTO SOCIAL MEXICANO DE LA LUCHA POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Una vez presentado el catálogo de conceptos que se consideró necesario para la presentación y comprensión del contexto y evolución de los derechos de las mujeres en general y del derecho a una vida libre de violencia en específico, se procede a realizar el recorrido histórico del movimiento feminista, que es el que ha encabezado la lucha por la igualdad de género y la no discriminación, así como de los avances en las distintas etapas históricas de nuestro país, desde el periodo de conquista y colonización de América, hasta la actualidad.

En principio es relevante señalar que el movimiento feminista a escala global tuvo sus inicios desde mediados del siglo XIX, con exponentes como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, entre otras, quienes pusieron al descubierto los idearios sexistas,

racistas y patriarcales de los discursos filosóficos científicos y políticos, así como las prácticas sociales.⁵⁶

Existe la hipótesis de que el origen de la violencia de género en nuestro país inició con la conquista española, esta propuesta se deriva del estudio de la sociedad prehispánica, en donde se observa que, hasta cierto punto, el género era indiferente, pues existían dioses y diosas, socialmente el trabajo femenino era complemento del de los hombres, por lo que en general lo importante era que cada quien hiciera lo que le correspondía, sin distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. Incluso la labor de la prostitución era respetada por que era un tipo de servicio para los guerreros que iban a librar batallas, para evitar la violación de las mujeres de los pueblos conquistados⁵⁷.

Es hasta 1521, con la llegada de los españoles de las peores características, y bajo un esquema religioso completamente patriarcal, en que nace la dependencia de la mujer respecto del hombre. Fue así que se instauró este sistema machista en que la mujer era inferior, y más aún, la mujer indígena de piel oscura era incluso más inferior; lo anterior se ejemplifica con el regalo de las esclavas a Hernán Cortés a su llegada, entre las cuales se encontraba Mallinalitzin, posteriormente conocida como Malinche⁵⁸.

En los siglos posteriores no hubo cambios significativos en favor de las mujeres, pues algunas de las propuestas encaminadas al reconocimiento de la igualdad de derechos de hombres y mujeres fueron desestimadas. El primer progreso que se puede destacar es en la época del Porfiriato con la publicación en 1878 del Reglamento para escuelas primarias y secundarias de niñas, con la que se produjo

⁵⁶ Valles Ruiz, R. M., *Primer Congreso Feminista de México, Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015 p. 245.

⁵⁷ García Tovar, Frida Alexandra, *Violencia de género: de 1521 al día de hoy*, Revista abogacía, diciembre 2021, consultado el 29 de enero de 2024 en <https://www.revistaabogacia.com/violencia-de-genero-de-1521-al-dia-de-hoy/>

⁵⁸ *Idem*.

la obligatoriedad de la enseñanza de la primaria a las niñas, y se reguló la enseñanza de artes y oficios de las mujeres en el Distrito Federal⁵⁹.

Gabriela Cano ubica el surgimiento de los “feminismos mexicanos” con la llegada de la Revolución Mexicana, cuyo objetivo en común era derrocar a Porfirio Díaz. En cuanto a los diversos caminos que tomaron o las luchas que enarbolaban hubo quienes se identificaban con Bernardo Reyes, las hubo maderistas, y posterior a la traición de Victoriano Huerta contra Madero, hubo divisiones entre las constitucionalistas⁶⁰.

Como se anticipa, fue en este periodo que, conjuntamente con los avances de algunos constitucionalistas, estas revolucionarias consideraron que era momento de la discusión sobre la condición de la mujer, por lo que fue entre los años de 1915 a 1920 que algunas de las mujeres dirigentes propagandistas, que simultáneamente iniciaron en el movimiento feminista, publicaron y editaron publicaciones sobre el debate de los derechos de las mujeres que inició a finales del siglo XIX, creando también sociedades feministas y realizando Congresos; una de las más destacadas es Hermilia Galindo, quien fue directora y editora de la revista feminista *La Mujer Moderna*⁶¹.

En el Primer Congreso Feminista, llevado a cabo el 28 de octubre de 1915 en el estado de Yucatán, la postura avanzada ya exigía el voto femenino, pero aún era un grupo minoritario dentro del movimiento, por lo que no se avaló dicha petición. Fue la misma Hermilia Galindo quien, para el Segundo Congreso presentó una ponencia en la que propone la “igualdad de ilustración” de hombres y mujeres, mismos derechos y prerrogativas que los hombres en todos los planos, y desarrolló una argumentación sobre el voto femenino, afirmando que, si ellas tienen obligaciones para con la sociedad, es lo justo que también tenga derechos, y debido

⁵⁹ Ruiz Carbonell R., *La Evolución Histórica de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 76, consultado el 29 de enero en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2758/5.pdf>

⁶⁰ Cano, G., “*Más de Un Siglo de Feminismo En México*”. Debate Feminista, México, vol. 14, 1996, pp. 345–60.

⁶¹ Rocha Islas, M. E., *Feminismos en Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, p. 216.

a que estas obligaciones incluyen, entre otras las contribuciones y la obediencia al gobierno, es decir, que en todos estos ámbitos las obligaciones son iguales para hombres y para mujeres, por lo que debía ser el mismo caso para el derecho al voto⁶².

Por segunda ocasión, debido a que este pensamiento era considerado contra el orden social establecido, la propuesta no prosperó, pero si dio legitimidad a la voz de las mujeres en el espacio público⁶³. Esta demanda incluso se presentó en 1916 ante el Congreso Constituyente, pero pasó sin ser discutido más allá de negarse por su incapacidad y falta de preparación; la negativa se plasmó en la Constitución, aunque algunos avances como la igualdad salarial y cierta protección a la maternidad de las trabajadoras⁶⁴.

El estado de Yucatán fue de gran importancia para el posterior logro del voto femenino, pues a partir de las llamadas ligas, se logró la concesión del derecho a votar y a ser candidatas en San Luis Potosí, pero al presentarse en 1926 como candidatas Elvia Carrillo Puerto y Herminia Barrón, no se les reconoció el triunfo. Los embates en la materia continuaron en 1937, cuando se fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, por quien se presentó Refugio García en Uruapan, y Soledad Orozco en de León, como candidatas para los plebiscitos internos del Partido Nacional Revolucionario, pero solo se reconoció el triunfo de la de León. En este mismo año, Lázaro Cárdenas presentó la primera iniciativa para la concesión del voto, y a pesar de ser aprobada por ambas Cámaras, no se concluyó su declaratoria formal⁶⁵.

La primera reforma que reconoció el sufragio parcial de las mujeres para el caso de elecciones municipales fue en 1947, a dos meses de iniciar el sexenio de Alemán, pero el movimiento feminista continuó los reclamos sobre los derechos a la educación, trabajo, en el ámbito familiar y por supuesto al voto. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 con Ruiz Cortines, que con la reforma del artículo 34 constitucional

⁶² *Ibidem.* p. 217

⁶³ *Ibidem.* p. 219

⁶⁴ Ruiz Carbonell R., Cit. p.77- 78

⁶⁵ Ruiz Carbonell R., Cit, p.p. 78.

que por fin llegó el reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres, para que, por primera vez, en 1954, las mujeres pudieran votar en elecciones federales⁶⁶.

Tras esta victoria en las luchas por los derechos sociales y políticos de las mujeres en nuestro país, hubo un auge para la década de 1970 y hasta los años noventa; en un inicio se identifica la organización de la lucha, poniendo énfasis en la desigualdad y opresión femenina, y por fin tocando temas de sexualidad, anticonceptivos y aborto; para los años ochenta hay estancamiento, pero para 1990 hay alianzas para la búsqueda de la democratización⁶⁷.

Como es sabido, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 estuvieron influenciados por el feminismo norteamericano, cuyo eco del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Estados Unidos resonaba; este movimiento ya no reclamaba únicamente el sufragio, sino que era una crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, el aspecto sexual y hasta el trabajo doméstico.

Los esfuerzos de las mujeres mexicanas tuvieron ciertos avances en el marco de las preparaciones de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en la Ciudad de México en 1975; en 1974 se reconoció la igualdad jurídica entre el varón y la mujer y el derecho de toda persona a decidir de manera libre sobre el número y esparcimiento de sus hijos⁶⁸.

Aún después de este evento internacional, los avances en la materia incluyeron reformas jurídicas que buscaban eliminar las desigualdades entre sexos. Algunas de las que se pueden mencionar son: la derogación del requisito del permiso del marido a las mujeres casadas para tener trabajo remunerado, contenido en el

⁶⁶ Rodríguez Bravo R., *Los derechos de las mujeres en México, Breve recorrido en Cita Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, p.p. 280-281.

⁶⁷ Ruiz Carbonell R., Cit, p. 83.

⁶⁸ Rodríguez Bravo R ...Cit. p. 283.

Código Civil de 1928; el establecimiento del derecho de las mujeres de ser ejidatarias y ser sujetas de dotación de tierras.

Como se mencionó, en esta década las demandas dejaron de enfocarse en lo político, y la sexualidad femenina, especialmente la despenalización del aborto fue un derecho que empezó a reclamarse, como un ejercicio voluntario de la voluntad, por lo que también se reclamaba el derecho a anticonceptivos y educación sexual, pero como en el caso del sufragio universal, los legisladores no lo discutieron en esta primera aproximación⁶⁹.

Los derechos sexuales y reproductivos se incorporaron al texto constitucional en su artículo 4° en reforma del 31 de diciembre de 1974, y en 1983 se añadió el derecho a la protección de la salud, estableciendo no solo la obligación de paternidad y maternidad responsables, sino la de proporcionar a mujeres y hombres la información adecuada para la planificación familiar.

Para la década de los ochenta, y a causa del sismo de 1985 se develaron las precariedades laborales que existían; en ese sentido, las organizaciones se concentraron en reclamos sobre condiciones de trabajo, educación y violencia. Fue hasta acabado el proceso electoral para el que se conformó el bloque de izquierda -que posteriormente se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática- cuando se retomó la agenda feminista. Se destacan logros como la persecución del delito de violación de oficio, que el presunto culpable en estos casos no tuviera derecho a fianza, y la tipificación del hostigamiento sexual⁷⁰.

La SCJN abordó el tema de si existía la violación dentro del matrimonio en 1994, resolviendo en ese momento que no; este criterio no fue revertido sino hasta 2005,

⁶⁹ Eli Bartra, *“El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia”*, La Ventana, revista de estudios de género, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, núm. 10, p. 218, diciembre de 1999.

⁷⁰ Cfr. Bernal Gómez, B., *“La mujer y el cambio constitucional en México. El Decreto de 31 de diciembre de 1974”*, en Carpizo, Jorge y Madrazo, Jorge (coords.), Memoria del III Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1984, p. 297.

cuando determinó que la excepción del delito de violación por matrimonio era violatoria del derecho a la libertad sexual e integridad personal de las mujeres⁷¹.

La siguiente década fue significativa para la reivindicación de los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito internacional, que posteriormente impulsaría reformas y leyes en la materia, algunos de ellos fueron: la participación de la delegación mexicana en la Conferencia de Viena sobre Derechos humanos en 1993, donde se reconocieron los derechos de las mujeres y se firmó la declaración para abatir la violencia de género; el año siguiente en la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo, se hizo el compromiso internacional de garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, así como erradicar la violencia hacia las mujeres; también en 1994 se aprobó en la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belem do Pará; en 1995 en la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing surgieron la Declaración y Plataforma de Acción respectivas donde se centraron en doce esferas de especial preocupación con los temas de pobreza, educación, salud, violencia, economía, mecanismos para el adelanto de las mujeres y medio ambiente⁷².

Fue a partir de esta Conferencia que se consensuó una agenda encaminada en la integración de las mujeres en igualdad de condiciones a través de leyes, organismos y políticas públicas⁷³.

A pesar de ello, no se puede obviar que también en esta época se visibilizó el problema de violencia contra la mujer en nuestro país a raíz del asesinato de dos mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua lo que pudiera ubicarse como el principio del estudio de la violencia contra la mujer en nuestro país como un problema serio tanto

⁷¹ Varios 9/2005-PS, solicitud de modificación a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/94, derivada de la contradicción de tesis 5/92, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, sentencia de 16 de noviembre de 2005. Consultable en: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, enero de 2006, página 659.

⁷² Bonifaz Alonso L., *La evolución de los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2017, p.p. 11.

⁷³ *Ibidem*. p. 13.

interna como internacionalmente, también fue uno de los grandes impulsos para la toma de acciones concretas en la materia⁷⁴.

Otro acontecimiento social de importancia se suscitó en 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que reivindicó derechos indígenas contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sus esfuerzos devinieron en una iniciativa de reforma constitucional presentada al Congreso de la Unión en 2000 y aprobada en 2001 donde se incluyeron cambios referentes a las mujeres indígenas que continuarían añadiendo, como el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres en la aplicación de los sistemas normativos de pueblos indígenas; su participación en condiciones de equidad frente a los hombres en elección de autoridades y establecer política sociales para mejorar las condiciones de salud de las mujeres migrantes⁷⁵.

En el año 2000 como seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing, se convocó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se identificaron nuevas preocupaciones, como el impacto negativo de la globalización en las mujeres, un acceso igualitario a la protección social y los derechos de herencia y propiedad, por lo que el proceso de modificación y adecuación de marcos normativos continuó avanzando, a pesar de que en la actualidad aún no es posible considerar que se han consolidado los objetivos planteados, ni que se ha logrado la igualdad plena entre los géneros⁷⁶.

En 1992 se incluyó en el artículo 4° constitucional la referencia a las culturas que componen de forma pluricultural a nuestra nación, y la protección de sus lenguas, cultura, usos y costumbres; sin embargo, la referencia específica a las mujeres indígenas se hizo en la Plataforma de Acción de Beijing, donde se recomendó realizar acciones de atención integral para contrarrestar los mecanismos que colocan a las mujeres en mayor desventaja, como la atención a la multicausalidad de la desigualdad de género, especificando “los intereses y preocupaciones propios

⁷⁴ *Ibidem*. p. 12

⁷⁵ Reforma al artículo 2o. constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

⁷⁶ Ruiz Carbonell R., Cit. p.p. 105- 106.

de la mujer indígena, cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social mejoran las comunidades en que viven”⁷⁷.

También en este año se aprobaron los Objetivos del Milenio, signados por nuestro país, con el compromiso del trabajo por la igualdad de género; el Estado Mexicano realizó importantes reformas legislativas en materia de reconocimiento de la mujer en la economía del hogar, favorecimiento en casos de divorcio y custodia de los hijos e hijas, y la garantía de sus derechos como víctimas en materia penal⁷⁸.

En nuestro país específicamente fue en 2001 cuando, con reforma al artículo 1° se prohibió la discriminación, estableciendo que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Algunos otros programas implementados para la eliminación de la desigualdad de género fueron el Programa Nacional de la Mujer Alianza para la Igualdad, el Progres- Oportunidades, y el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, los 3 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, enfocados en la participación plena de las mujeres en la economía, política, sociedad y cultura del país, y también la creación de un sistema interinstitucional para la prevención, detección, atención y evaluación de casos de violencia intrafamiliar; estos programas representaron los antesala de las leyes que se aprobaron a partir del cambio de milenio⁷⁹.

Dentro de las leyes que dieron seguimiento a la reforma de 2001 y se incorporaron al sistema jurídico mexicano son la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres en 2006; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de

⁷⁷ Bonifaz Alonso L., Cit p. 29.

⁷⁸ Bonifaz Alonso L., Cit. p. 13.

⁷⁹ Lechuga Montenegro J., Ramírez Argumosa G. y Guerrero Tostado M., *Educación y Género. El largo trayecto de la mujer hacia la modernidad en México*, Facultad de Economía UNAM, vol. 15, núm. 43, 2018, p.p 110- 139 consultado el 30 de enero de 2024 en <https://www.redalyc.org/journal/3635/363557935007/html/>

Violencia en 2007; la Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 con el objetivo de regular y sancionar la prohibición de la discriminación y la toma de medidas en los ámbitos educativo, laboral, de la salud, política o de justicia; la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y la promulgación de la respectiva Ley del Instituto Nacional de las Mujeres de 2001, la NOM- 046- SSA2- 2005 que estableció los criterios a observar para la detección, prevención, atención médica y orientación a usuarios en situaciones de violencia familiar y sexual.

El avance en cada uno de los estados de la república en la materia ha presentado sus retos, principalmente por el ala conservadora que ha provocado que las agendas locales se avoquen a los temas de menor resistencia como la desigualdad de género en la pobreza, la violencia doméstica, evitando la discusión de tópicos como la sexualidad, diversidad sexual y la interrupción del embarazo. Por su parte, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México donde se han presentado iniciativas importantes en materia de derechos reproductivos, derechos de la comunidad LGBTTI+.

En 2008 la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad referente a la reforma de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a su Código Penal y Ley de Salud, donde se despenalizó el aborto voluntario dentro de las primeras doce semanas de gestación⁸⁰.

En el sexenio de Felipe Calderón se establecieron metas e indicadores para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Milenio que se incluyeron en su Plan Nacional de Desarrollo, entre los que se presentó el Programa Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 2009-2012⁸¹.

En el análisis estadístico, en materia de educación, los datos del INEGI arrojan un avance en la tasa de alfabetización, pasando de cerca de un 95% en 1990, a casi 99% en 2014, resaltando que, para este año, la tasa de mujeres incluso superó a la

⁸⁰ Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Ministro Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz, sentencia de 28 de agosto de 2008, consultado el 30 de enero de 2024 en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=91638>.

⁸¹ Bonifaz Alonso L., Cit. p. 288.

de los varones. Según los datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), la evolución en matrícula por género para las mujeres también muestra mejoras, pues pasó de ser del 30% a nivel licenciatura en 1980, a 49% en 2003, es decir, solo una diferencia de dos puntos porcentuales con los hombres⁸².

El final de la década de 2010 introdujo en el marco nacional cambios en las normas constitucionales, derivados de las sentencias dictadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por casos como el de Campo Algodonero y Fernández Ortega y otros vs. México, que visibilizaron la dificultad del acceso a la justicia para las mujeres, así como que el sistema normativo ofrecido a ellas cuando acuden a denunciar la violación de sus derechos aún es débil, en el mejor de los casos.

Lo anterior sirvió para impulsar en 2011 una reforma constitucional más que necesaria en materia de derechos humanos, la cual elevó a jerarquía constitucional a los tratados internacionales en la materia firmados por nuestro país -es importante señalar que si bien en 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó como criterio que jerárquicamente dichos tratados se encontraban en segundo plano, inmediatamente debajo de la constitución y por encima del derecho federal y local, el rango constitucional se dio hasta esta reforma- y añadió la interpretación conforme así como el principio pro persona; todo lo anterior otorgó una protección más amplia de los derechos, y mayor compromiso del Estado no solo de forma interna, sino frente a Organismos Internacionales como lo fue la aceptación de vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto trajo en papel una de las propuestas en género más importantes, plasmado también en su Plan Nacional de Desarrollo, donde se establecieron cinco metas al respecto, dentro de las que se encontraba la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, los altos índices de violencia

⁸² Bonifaz Alonso L., Cit. p. 52

de todo tipo evidenciaron que esta es una problemática estructural de la sociedad mexicana⁸³.

En 2015 se realizó un balance sobre la consecución de los Objetivos del Milenio, y en materia de derechos de las mujeres y género, se determinó que dichos objetivos carecen de perspectiva de género, coincidiendo con los resultados de nuestro país a lo largo de tres informes, especialmente en cuanto a las cifras de feminicidio, en materia de diversidad sexual y derechos humanos⁸⁴.

En nuestro país se permite y fomenta la violencia hacia las mujeres debido a los patrones de la educación cultural que nos ha formado, lo que a su vez se propaga a las siguientes generaciones con actitudes y roles machistas; es por esto mismo que las mujeres no denuncian al ser víctimas de violencia, pues el miedo a represalias y revictimización siguen existiendo.

La recopilación de datos e información sobre la violencia contra la mujer inició en los años noventa; dichos datos arrojaron para 2019 un porcentaje de al menos 66.1% de las mujeres de 15 años y más habían sido violentadas de alguna manera⁸⁵.

Este conjunto de normas y medidas representan el esfuerzo formal por cumplir los compromisos adquiridos y lograr el acceso de las mujeres a sus derechos en condiciones de igualdad frente a los hombres, pues reconocer la existencia de discriminación incluso en los textos normativos y trabajar por su erradicación es uno de los pasos importantes para la igualdad formal y sustantiva, sin embargo, la información y estadística es una forma de diagnóstico para saber si los esfuerzos se encuentran apropiadamente encaminados a cumplir los objetivos planteados, puesto que prima facie se puede afirmar que los esfuerzos no han sido suficientes para lograrlos.

⁸³ Ruiz Carbonell R., Cit. p. 288

⁸⁴ Galeana P. presentadora, *Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, p.p. 288- 290.

⁸⁵ Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, *Violencia contra las mujeres en México*, consultado el 30 de enero de 2024 en <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/>

CAPÍTULO II

ESTÁNDARES JURÍDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

El Estado Mexicano forma parte de la sociedad internacional, y en su compromiso por la protección y garantía de los derechos humanos, también forma parte de organismos internacionales universales y regionales, así como ha signado diversos tratados en la materia, lo que al mismo tiempo que amplía el abanico de derechos reconocidos, también significa que se han adquirido compromisos internacionales, y que existen directrices o doctrina internacional derivadas de estos compromisos, para ser consideradas casos en los que la legislación interna no sea suficiente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad mexicana, y en este caso, a las mujeres de nuestro país en la búsqueda de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

En la presentación del marco de derecho supranacional en la materia, también se muestra el impacto que han tenido diversas resoluciones que atañen directa o indirectamente a nuestro país, y las medidas que se han tomado como consecuencia de ellas, como lo son reformas constitucionales, creación de nuevas leyes, establecimiento de mecanismos de protección, e incluso criterios jurisprudenciales novedosos que amplían la protección de los derechos humanos de las mujeres.

2.1 Estándares Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres y combate de la violencia contra la mujer

La Organización de las Naciones Unidas como máximo organismo de cooperación internacional, ha marcado las directrices y prioridades para la agenda internacional, ejemplo de ello es que fue hasta la primera Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en 1975 en México, que el tópico de los derechos humanos de las

mujeres se consideró como prioritario para la agenda internacional; posteriormente, para la segunda Conferencia en el rubro realizada en 1980 en Copenhague, es que se reconoció mundialmente y se asumió como responsabilidad de los gobiernos la problemática de la violencia contra la mujer como violación grave de derechos humanos.

Es por lo anterior que en las siguientes páginas se estudiarán los diversos instrumentos internacionales que han tenido incidencia en nuestro tema de investigación, y que forman parte del bloque constitucional y convencional de nuestro país, puesto que estos instrumentos generan para los órganos de gobierno, diversas obligaciones en la materia, obligaciones cuyo cumplimiento también será estudiado.

2.1.1 ONU MUJERES:

Se trata de la Organización dentro del sistema de las Naciones Unidas específicamente enfocado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; fue creada con la finalidad de tener mejores directrices e impulso para el logro de la igualdad de género, por lo que el 2010 se creó ONU Mujeres como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, encargada de apoyar a los Estados miembros en el establecimiento de normas internacionales para la igualdad de género, así como trabajar con gobiernos y sociedad civil para impulsar la creación de leyes, políticas, programas y servicios encaminados a lograr los acuerdos relativos a la Agenda 2030 para lograr un mundo más inclusivo y con igualdad de género como elemento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible⁸⁶.

⁸⁶ *Acerca de ONU Mujeres* consultado el 21 de febrero 2024 en <https://www.unwomen.org/es/about-un-women>

ONU Mujeres tiene para su funcionamiento, cuatro organismos centrados específicamente en la Igualdad de Género y el empoderamiento de la mujer: la División para el Adelanto de la Mujer (DAM), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)⁸⁷.

Parte de los avances internacionales en pos de la igualdad de género fueron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW).

2.1.2 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

En septiembre de 1995 con la reunión de 189 Estados miembros de la ONU en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en China, se aprobó esta declaración como hoja de ruta para lograr la igualdad de género. Esta plataforma abarca 12 esferas: la pobreza, la educación y capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y adopción de decisiones, medios de difusión, el medio ambiente, y la niñez⁸⁸.

En sus puntos 23 a 34 específicamente se habla de los compromisos de los Estados miembros en la esfera de derechos de las mujeres, entre los cuales se mencionan garantizar a todas las mujeres y niñas todos los derechos humanos y libertades, adoptar las medidas necesarias para la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, y suprimir obstáculos para la igualdad de género, prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y niñas⁸⁹.

⁸⁷ *Idem.*

⁸⁸ Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas, 1995 y reimpresso por ONU Mujeres en 2014, p. 9.

⁸⁹ *Ibidem.* p.p. 18 – 19.

La Plataforma de Acción es el programa encaminado para potenciar el papel de la mujer en la sociedad, con el principio fundamental de que los derechos humanos de las mujeres y niñas son parte inalienable e integral de los derechos universales; esta Plataforma reconoce y hace suyos los acuerdos alcanzados en otras Cumbres y Conferencias, reafirmando los compromisos adquiridos, y reconociendo que, a pesar de los esfuerzos conjuntos, no se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres⁹⁰.

En la Plataforma se establecen las esferas de especial preocupación así como la adopción de medidas estratégicas en ellas; dentro de los objetivos estratégicos para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer corresponde a los gobiernos condenar dicha violencia, no cometer actos de violencia y tomar medidas para prevenirla e investigar los actos de violencias; introducir sanciones penales, civiles y administrativas en las legislaciones nacionales o reforzar las existentes para castigar y reparar los daños causados por cualquier tipo de violencia; ratificar y aplicar todas las normas e instrumentos internacionales relacionados, aplicar la CEDAW, promover la integración de la perspectiva de género en todas la políticas y programas en materia de violencia; ofrecer a las víctimas acceso a sistemas judiciales y soluciones justas y eficaces para reparar el daño y aprobar y aplicar leyes contra los responsables de prácticas y actos de violencia contra la mujer; formular planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer, adoptar medidas para modificar los modelos de conducta sociales y culturales basadas en la inferioridad de uno de los sexos; financiar la formación de los servidores públicos para evitar abusos de poder por violencia contra la mujer; incluir en los informes presentados la información sobre los avances en la materia y las medidas adoptadas⁹¹.

⁹⁰ *Ibidem.* p. 34.

⁹¹ *Ibidem.* p.p. 96-99.

En el año 2000 durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General , se reafirmaron los compromisos de la Declaración, y se realizó una revisión de los logros y obstáculos en la consecución de los objetivos planteados, que se denominó Beijing +5; también se identificaron problemas para la plena aplicación de este instrumento y una reevaluación de las medidas necesarias; algunos de los obstáculos identificados fueron los procesos de mundialización, el cambio a las corrientes de libre comercio y cambios en modos de producción, adelantos tecnológicos, que han tenido como consecuencia mala distribución de la riqueza y el incremento en la desigualdad⁹².

2.1.3 Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 después de que se ratificó por veinte Estados; actualmente la convención cuenta con 189 Estados Partes de los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas.⁹³

Esta Convención ha sido instrumental para dar luz a las áreas en las que a las mujeres se les niega la equidad, lo que ha dado como resultado varias declaraciones y convenciones en el tópico. Este documento describe el significado de la equidad y cómo alcanzada, estableciendo no solo una declaración internacional de los derechos de las mujeres, sino una agenda para que los países garanticen dichos derechos. La agenda que plantea se divide en tres dimensiones

⁹² *Ibidem*. p.p. 264 -266.

⁹³ Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, New York, 1979, consultado el 19 de febrero de 2024 en <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

sobre la situación de las mujeres: los derechos civiles y el estatus legal de las mujeres, los derechos reproductivos, así como el impacto de los factores culturales en las relaciones entre géneros⁹⁴.

El tercer eje de la Convención tiene como objetivo un mayor entendimiento del concepto de derechos humanos y reconoce formalmente la influencia de la cultura y tradición en las restricciones que existen para que las mujeres gocen plenamente de sus derechos fundamentales y hace énfasis en que es necesario cambiar los roles tanto del hombre como de la mujer para alcanzar la igualdad. Es así que los Estados partes están obligados a trabajar en eliminar los patrones sociales y culturales para eliminar los prejuicios y otras prácticas basadas en la inferioridad o superioridad de alguno de los sexos y los estereotipos, desde la revisión de los libros de texto, programas escolares, etc.

La implementación de esta convención es monitoreada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), cuyo mandato se establece en el artículo 17 de la Convención. Se compone de 23 expertos nominados por sus gobiernos y elegidos por los Estados parte. Dichos Estados tienen la obligación de entregar un informe cada cuatro años, indicando las medidas que se han adoptado para cumplir las metas de la Convención; los reportes son discutidos en las reuniones anuales del Comité en conjunto con los representantes de los Estados, donde se establecen las áreas que requieren atención; el Comité también realiza recomendaciones generales a los a los Estados miembro.

El artículo 2 de la Convención establece la obligación de los Estados parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias incluyendo sanciones, prohibiendo la discriminación contra la mujer, así como establecer las protecciones legales para los derechos de las mujeres, abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra la mujer y eliminar cualquier ley, regulación o práctica que

⁹⁴ *Idem.*

constituya discriminación contra la mujer.⁹⁵ Como ya se mencionó, este tratado busca la erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, incluyendo los derechos civiles, reproductivos, en acceso a la educación, acceso a la salud, igualdad ante la ley; así mismo, hace hincapié en que se deben atender los problemas tan particulares que enfrentan las mujeres indígenas y de comunidades rurales.

Hasta 2021, el Comité ha adoptado 3 recomendaciones generales en distintos temas, dentro de los cuales se puede resaltar la Recomendación general número 35, sobre violencia por razón de género contra la mujer, que actualiza la recomendación general número 19 de 1992 sobre violencia contra la mujer.

Dentro de las recomendaciones se aclara que la discriminación contra la mujer incluía la violencia por razón de género, que constituye una violación a los derechos humanos, añadiendo que, dado que los Estados parte han respaldado esta interpretación por más de 25 años, esta *opinio juris* ha pasado a ser un principio de derecho internacional consuetudinario. De especial importancia para este trabajo es el señalamiento que se hizo sobre la erosión de los marcos jurídicos donde se debilitan las respuestas del Estado frente a la erradicación de la violencia contra la mujer en nombre de la tradición, la cultura, la reducción del gasto público o por las crisis económicas,⁹⁶ puesto que estas justificaciones fueron algunas de las que se oyeron a lo largo del sexenio analizado por parte de los funcionarios públicos, al punto de que se dejó completamente fuera del Plan Nacional de Desarrollo cualquier tema relacionado a los derechos de la mujer, y la bandera del partido en el poder es la austeridad.

La Convención también cuenta con un Protocolo Facultativo aprobado el 6 de octubre de 1999, donde los Estados miembros reconocieron la competencia del Comité para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas bajo

⁹⁵ *Ibidem*, artículo 2.

⁹⁶ Recomendación general núm. 35 sobre violencia por razón de género contra la mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 26 de julio 2017.

la jurisdicción de alguno de los Estados parte y que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos enunciados en la Convención. En general este protocolo establece los mecanismos de comunicación, los procedimientos a seguir y las facultades del Comité⁹⁷.

2.1.4 Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención Belém Do Pará”

Se trata del instrumento regional en la materia creado por la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, y firmado y ratificado por nuestro país en 1998 y mejor conocida como Convención de Belém do Pará.

La Convención en su introducción afirma que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana, y que trasciende todos los sectores de la sociedad, por lo que considera que su eliminación es condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres. La Convención propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra de todo tipo de violencia, tanto en el ámbito público como privado⁹⁸.

El primer artículo de importancia es el cuarto, puesto que en él se establecen una serie de derechos que, puesto que nuestro país es parte de la convención, conforme al artículo 1° constitucional, forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y convencionalidad. El artículo 5 consagra el derecho al goce de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, y la obligación de los Estados partes de otorgar la total protección de dichos derechos, añadiendo el reconocimiento de dichos Estados de que la violencia contra la mujer impide y anula ese ejercicio⁹⁹.

⁹⁷ *Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer*, Naciones Unidas, octubre de 1999, artículos 1 y 2.

⁹⁸ *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer*, Organización de Estados Americanos, 1994, consultado el 20 de febrero de 2024 en <https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp>

⁹⁹ *Ibidem.*, artículo 4.

Belém do Pará representa para el Estado mexicano, debido a lo dispuesto en su artículo 7, que está obligado a adoptar todas las medidas legislativas, procedimientos, mecanismos judiciales y administrativos, así como políticas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como abstenerse de cualquier acción de violencia, y garantizar que toda mujer que sufra violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño y compensación justos¹⁰⁰.

Uno de los mecanismos de protección que se establecen en este tratado será por medio de informes nacionales que se entregan a la Comisión Interamericana de Mujeres, con la información de las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia, la asistencia a las mujeres afectadas, y las dificultades para alcanzar dichos objetivos. Los Estados parte también pueden solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de esta convención¹⁰¹.

Por lo que respecta a quienes pueden presentar denuncias o quejas sobre la violación a la convención, específicamente del artículo 7, dice que cualquier persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental debidamente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede hacerlo, y que la Comisión considerará dichas denuncias para seguir los procedimientos establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹⁰².

2.1.5 Jurisprudencia Internacional en Materia de Violencia Contra la Mujer

El marco normativo internacional se compone de los tratados o convenios internacionales, los principios generales del derecho y la costumbre internacional,

¹⁰⁰ *Ibidem.*, artículo 7

¹⁰¹ *Ibidem.*, artículos 10 y 11.

¹⁰² *Ibidem.*, artículo 12

pero además de ello, también se encuentra la jurisprudencia internacional, ya sea del Sistema Universal, o de los Sistemas Regionales a los que el Estado pertenezca, como es el caso del Sistema Europeo, el Sistema Interamericano, o la Unión Africana. Es por ello que también es necesaria la revisión de esta jurisprudencia en la materia, que en muchas de las ocasiones resulta vinculante para las autoridades estatales, y llega a modificar la legislación interna de un país.

2.1.5.1 Sentencias De La Corte Interamericana De Derechos Humanos En La Materia

En este apartado se analizarán algunas de las decisiones dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y específicamente las que por su importancia o gravedad fueron llevadas al tribunal de derechos humanos de este sistema, enfocándonos en los que han sido contra el Estado Mexicano, y que además han tenido gran relevancia o impacto en nuestro marco normativo interno.

2.1.5.1.1 González y otras vs. México (Campo Algodonero):

La demanda presentada en 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano se refiere a la responsabilidad internacional del mismo por la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonerero de Ciudad Juárez en 2001. Se responsabilizó al Estado por la falta de medidas de protección de las víctimas, falta de prevención de los crímenes pese a conocer que existía un patrón de violencia de género en la región que había dejado numerosas mujeres y niñas asesinadas, la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición y posteriormente a la debida diligencia en la investigación, y la denegación de justicia y reparación¹⁰³.

¹⁰³ Rojo, L. Comp., *Sumarios de Jurisprudencia / Violencia de Género*, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 2da Edición, 2011, p.p. 22

Como parte de los antecedentes del caso así como de los argumentos de la Comisión, es que desde 1993 existía en Ciudad Juárez un aumento significativo en las desapariciones y homicidios de mujeres y niñas, especialmente trabajadoras de maquilas, estudiantes y personas de escasos recursos, hecho que el Estado Mexicano reconoció; también se alegó que varias de las víctimas presentaron signos de violencia sexual, identificando que en el caso de las mujeres, eran secuestradas y mantenidas en cautiverio, y a pesar de las denuncias de desaparición, pasado el tiempo eran encontrados sus cadáveres en terrenos baldíos con signos de violencia, mutilaciones y tortura.

Por su parte el Estado negó que existiera un patrón en los motivos de los homicidios de mujeres, pues señaló que ellos tenían “causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con patrones criminales diferenciados, que se encontraban influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer” y aunque reconocían la cultura arraigada con estereotipos discriminatorios contra la mujer, era tarea difícil un cambio en dichos patrones culturales¹⁰⁴.

En este caso, la Corte concluyó que las jóvenes fueron víctimas de violencia contra la mujer, basándose en los informes de la Relatoría de la CIDH, del CEDAW y de Amnistía Internacional que señalaron que la situación de Ciudad Juárez era manifestación de violencia basada en género, determinando así que se trataba de homicidios de mujeres por razón de género”, ahora llamados feminicidios¹⁰⁵. La Corte también consideró que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, así como la obligación de investigar los hechos, violando los derechos de acceso a la justicia y protección judicial¹⁰⁶.

Por último, la importancia de esta sentencia para nuestro país es, que como parte de los resolutivos se condenó al Estado a realizar la investigación del caso con

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 26.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 34.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 44.

perspectiva de género, estandarizar sus protocolos de investigación conforme al Protocolo de Estambul, crear un padrón de mujeres y niñas desaparecidas e implementar cursos y capacitación en la materia a los funcionarios públicos, así como que se nombró y visibilizó por primera vez el problema de la violencia feminicida en México.

2.1.5.1.2 Rosendo Cantú y otra vs. México:

La demanda fue planteada por la supuesta responsabilidad del Estado por la violación y tortura en contra de Valentina Rosendo Cantú- quien cabe destacar que era menor de edad en el momento de los hechos- en 2002 por parte de militares, así como por falta en la debida diligencia e investigación, falta de reparación, la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a derechos humanos¹⁰⁷.

Los hechos se produjeron en un contexto en el que había importante presencia militar en el estado de Guerrero, estado conformado por un porcentaje significativo de comunidades indígenas, y cuya presencia era dirigida a reprimir delincuencia organizada. En dicho contexto, la señora Rosendo se encontraba en un arroyo cerca de su domicilio cuando 8 militares la rodearon, interrogaron mientras le apuntaban con un arma, y tras negar tener conocimiento sobre las personas que buscaban, fue violada por al menos dos elementos militares. Tanto la señora como su esposo presentaron las denuncias y diversos recursos para solicitar que se realizaran las investigaciones necesarias, pero al tratarse de militares, la investigación se derivó a la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso¹⁰⁸.

¹⁰⁷ *Ibidem.* p. 70.

¹⁰⁸ *Caso Rosendo Cantú y otra vs. México*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 31 de agosto de 2010, consultado el 5 de marzo de 2024 en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf

El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad, aunque solo en cuanto a la falta de atención médica, oportuna y especializada en la presentación de su denuncia, así como en el incumplimiento de su deber de proteger los derechos del niño, y por último reconoció la dilación en la integración de las investigaciones. Sin embargo, solicitó que la Corte se pronunciara respecto a las demás presuntas violaciones¹⁰⁹.

México confirmó que la investigación iniciada en el fuero común con la denuncia de la señora Rosendo, se declinó a favor del Ministerio Público Militar, argumentando que los probables responsables de los hechos eran miembros del ejército mexicano. Al respecto la Corte destacó que no se puede justificar la intervención de la justicia penal militar en la investigación de una denuncia por violación sexual perpetrada contra una persona civil. Posteriormente, al revisar la averiguación previa del Ministerio Público Militar, observó que las actuaciones presentadas como pruebas por el Estado fueron realizadas con fecha posterior a la presentación de la demanda¹¹⁰.

La Corte además consideró que tanto la presencia de militares en la zona, como la violación sexual de la denunciante por agentes estatales se encontraban probados por diversos medios, constituyendo también violencia contra la mujer, es decir, una violación a los derechos humanos, ofensa a la dignidad humana, y manifestación de poder históricamente desigual entre mujeres y hombres. En cuanto a la intervención de la justicia militar, señaló que esta solo debe ser utilizada para juzgar a militares activos por comisión de delitos de función en sentido estricto, pues en casos de violación a derechos humanos, no satisfacen los requisitos de independencia e imparcialidad, y se remitió a la sentencia del caso Radilla Pacheco, para reiterar que el alcance de la justicia penal militar debe ser restrictivo y encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales de las funciones propias de la fuerza militar, no siendo este fuero el competente para la investigación

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 7-8.

¹¹⁰ *Ibidem* pp. 17- 18.

del delito cometido en contra de civil, pues la violación sexual por parte de militares no guarda relación alguna con la disciplina castrense, por lo que se afectó el debido proceso y el acceso a la justicia de la víctima¹¹¹.

Concluyendo este análisis, se destaca la importancia del caso dado que se trata del primer caso de tortura sexual cometida por elementos del ejército, y sentó un precedente para los casos en que militares cometan abusos y violaciones a derechos humanos de civiles, pues a raíz de ello se modificó el Código de Justicia Militar, limitando la competencia de la Justicia Militar en armonía con lo señalado por la Corte.

2.1.5.1.3 Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México¹¹²:

Los hechos denunciados acontecieron los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, donde policías de ese municipio así como de Texcoco, y elementos de Policía Federal Preventiva, en un operativo adelantado para reprimir las manifestaciones en dichos municipios, detuvieron a once mujeres, quienes durante su detención y traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, fueron sometidas a diversas formas de violencia, incluso de violación sexual como método de tortura, además de haber sido revictimizadas y denigradas por el personal médico del CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, practicar exámenes ginecológicos y a registrar las violaciones sexuales.

Posteriormente, a pesar de que se iniciaron diversas investigaciones penales en relación con estos hechos y actos, en el ámbito federal la autoridad se declaró incompetente por razón de ser delitos del orden común, y por lo que respecta al ámbito estatal, se abrieron cinco causas penales en contra de los elementos de policía, de las cuales algunas se declararon insubsistentes por falta de elementos probatorios, otros fueron absueltos, se han ejecutado órdenes de aprehensión contra

¹¹¹ *Ibidem*, pp. 34- 56.

¹¹² Corte IDH. Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.

policías, médicos y agentes del Ministerio Público; además de lo anterior, el 16 de octubre de 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su Recomendación 38/2006 donde identificó violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales y federales, y el 12 de febrero de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia bajo su facultad de investigación de carácter no jurisdiccional en la que concluyó la existencia de graves violaciones e individualizó a posibles responsables.

El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana emitió la sentencia por la declaró responsable al Estado Mexicano de la violación de derechos a la integridad personal, la vida privada, y a no ser sometido a tortura, así como a la libertad personal, derecho de defensa, derecho a garantías judiciales y protección judicial, derecho de reunión, en contra de las once mujeres víctimas de tortura sexual y de sus familiares. Dentro del desarrollo de este caso el Estado mexicano reconoció parcialmente la responsabilidad por los hechos individuales de las once mujeres víctimas del caso y sus familiares. Asimismo, dentro de las reparaciones, la Corte condenó a México a continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para sancionar a los responsables, brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas, realizar la publicación de la sentencia, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México, establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización de políticas e instituciones en materia de rendición de cuentas y uso de la fuerza de la Policía, otorgar becas en instituciones públicas de educación superior a algunas de las víctimas, elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres y el pago de las indemnizaciones, gastos y costas.

En este caso se destaca la participación tanto de elementos de policía, médicos y agentes del Ministerio Público en la comisión de estas violaciones, en el uso de la violación sexual y amenaza de la misma como actos de tortura física y mental, y la revictimización por parte del personal médico de las instancias de procuración de justicia, lo que constituyen diversas formas de violencia institucional que prevalecen entre las autoridades de los ámbitos federal y local, acciones abiertamente

contrarias a sus obligaciones como servidores públicos, tanto conforme a la constitución, como a las leyes de responsabilidades de servidores públicos aplicables.

2.1.5.2 Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia: Ana, Beatriz y Celia Pérez vs. México

El 16 de enero de 1996 el Centro por la Justicia y Derecho Internacional presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes eran indígenas tzeltales; en esta denuncia se alegaron violaciones a varios derechos consagrados a la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, libertad, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, así como los derechos del niño.

Los hechos que se denunciaron acontecieron el 1994 en Altamirano Chiapas, cuando un grupo de militares las detuvo junto con su madre para interrogarlas durante dos horas, tiempo durante el cual fueron separadas de su madre, golpeadas, violadas y torturadas para que confesaran su participación en el EZLN, lo anterior por orden de un oficial de mayor rango, y antes de finalmente al ser liberadas, las amenazaron de que si denunciaban serían encarceladas; se presentó la denuncia ante el Ministerio Público Federal con un examen médico ginecológico, el expediente abierto fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar, instancia que lo archivó.

La Comisión al valorar el informe médico, le dio valor probatorio de los hechos alegados; además, en su análisis basándose tanto la CADH como en la Convención Belém do Pará, determinó que la violación sexual cometida por las fuerzas de seguridad contra civiles constituye una grave violación de derechos humanos que además, bajo determinadas situaciones la violación constituye tortura, por el

sufrimiento físico y mental de la víctima, y por la intención de castigar, intimidar y humillar del agresor.

Al evaluar todos los elementos del expediente y conforme a todos los instrumentos aplicables, la Comisión concluyó que el Estado mexicano violó en perjuicio de las denunciantes los derechos ya mencionados, incluyendo los derechos del niño para el caso de Celia Pérez, quien era menor en el momento de los hechos¹¹³.

2.1.5.3 Algunas Decisiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la materia

Conforme al Protocolo Facultativo de la CEDAW, específicamente el artículo 7, el Comité está facultado para examinar comunicaciones que reciba, así como emitir opiniones y recomendaciones a las partes interesadas, y puede invitar al Estado parte interesado a proporcionar más información en los informes que debe presentar al Comité, sobre las medidas que adopte derivadas de las recomendaciones emitidas. En este sentido, aquí se presentarán algunas de las recomendaciones y opiniones que el instrumento ha emitido que, aunque carecen de fuerza vinculante, representan directrices para los Estados parte.

2.1.5.3.1 A. T vs. Hungría, Comunicación N° 2/2003 con decisión del 26 de enero de 2005.

La autora de la comunicación, ciudadana húngara afirmó ser víctima de violaciones por parte de Hungría debido a que ha sufrido de violencia doméstica y familiar por parte de su ex pareja por años y a pesar de iniciar procedimientos civiles y penales en su contra, la justicia del primero de ellos no falló a su favor, argumentando que no había probado la acusación, por lo que la autora aduce que su integridad física, salud física y mental y su vida se halla en peligro; el segundo procedimiento civil se encontraba suspendido, y de los procedimientos penales por lesiones y agresiones

¹¹³ *Ibidem*, pp. 129- 148.

que la dejaron hospitalizada, nos hay detención alguna ni medidas de protección emitidas en su favor, ni tampoco ha tenido acceso a la documentación del tribunal.

También explica que ha solicitado asistencia a autoridades locales, pero no ha tenido respuesta satisfactoria, por lo que reclama que el Estado ha violado sus derechos al no darle protección eficaz contra su ex concubino, y ha contribuido a que la violencia doméstica continúe.

El Comité realizó un análisis de lo presentado, y observó una falta de medidas eficaces por parte del Estado para responder satisfactoriamente en la defensa de sus derechos, por lo que consideró que el Estado no ha cumplido sus obligaciones infringiendo los derechos de la autora reconocidos en el artículo 2 apartados a), b) y e) así como el artículo 5 apartado a) y el 16 de esta Convención¹¹⁴.

2.1.5.3.2 Sahide Goekce vs. Austria, Comunicación N° 5/2005 con decisión del 6 de agosto de 2007.

Los autores de esta comunicación son el Centro de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica y la Asociación para el Acceso a la Justicia de Mujeres, quienes afirman que la víctima fallecida, nacional de Austria de origen turco fue víctima de violación del Estado de los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Convención.

La primera agresión fue a manos de su marido, que constó de violencia física y amenazas de muerte, del que se presentó denuncia y se giró orden de expulsión, y prohibición de regreso al domicilio para el agresor, sin embargo, a causa de la amenaza de muerte, la víctima no consintió se emprendieran acciones contra él, por lo que fue absuelto dado que las lesiones no eran graves. Hubo nuevas agresiones frente a sus hijos menores, por los que se emitieron nuevas órdenes, pero a pesar del conocimiento de la policía, no presentaron atestado policial, ni tomaron las declaraciones de familiares y testigos de diversas amenazas, ni del conocimiento de que el agresor poseía un arma. El procedimiento penal en contra del agresor se

¹¹⁴ *Ibidem* p.p. 396- 401.

paralizó por falta de pruebas y en 2002 el agresor disparó contra la víctima en su domicilio y frente a sus hijos.

A pesar de que el agresor se entregó a la policía y cumple condena de cadena perpetua, se encuentra en un centro para delincuentes con trastornos mentales. Por lo anteriormente narrado, los autores de la comunicación afirman que se constituyen las violaciones a la Convención dado que el Estado parte es responsable por las conductas de los agentes, al no adoptar las medidas con diligencia debida para impedir la violación de derechos de investigar y castigar actos de violencia, y proporcionar indemnización.

El Comité, con el análisis de los factores presentados, consideró que la policía sabía o debía saber el peligro que corría la víctima, y es responsable por no responder ni actuar con la debida diligencia para proteger a Sahide Goekce, constituyendo las violaciones a los derechos argumentados por los autores, por lo que emitió como recomendaciones al Estado:

- Reforzar la aplicación y vigilancia de las leyes que protegen contra violencia doméstica
- Enjuiciar de manera pronta y vigilante a los autores de esta violencia para hacer comprender la misma se condena, y utilizar todos los recursos penales y civiles para proteger a la mujer de la violencia; se hace hincapié que los derechos del perpetrador no pueden sustituir los de la mujer a la vida y a la integridad física y mental.
- Mejorar coordinación entre los encargados del cumplimiento de la ley y funcionarios judiciales, así como de todo el sistema penal
- Fortalecer programas de capacitación y formación sobre violencia doméstica a funcionarios públicos y encargados de impartición de justicia¹¹⁵.

2.1.5.3.3 Karen Tayag Vertido vs. Filipinas, Comunicación N° 18/2008 con decisión del 16 de julio de 2010.

La autora es nacional de Filipinas, quien denuncia haber sido víctima de discriminación contra la mujer y violación a sus derechos conforme a la Convención.

¹¹⁵ *Ibidem*, pp. 403- 409.

Lo anterior derivado de hechos del 29 de marzo de 1996, cuando al ocupar el cargo de Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Davao, fue violada por el Presidente de la Cámara con uso de violencia; dentro de las 24 horas se sometió a examen médico forense en el que se constató la violación, tras lo que acudió a la policía a denunciar el incidente, sin embargo los fiscales desestimaron la denuncia por no haber causa probable, a lo que la autora presentó una apelación que logró que la revocaran, con lo que se acusó al agresor por violación, y después de 80 días de emitida la orden de detención, fue detenido.

Sin embargo, a causa de retrasos por causas imputables tanto al sistema de justicia, como a los recursos presentados por el acusado, en 2005 el Tribunal Regional de la ciudad absolvió al agresor argumentando que es fácil formular una acusación de violación, pero es difícil probarla, y aún más difícil desmentirla; que debido a la naturaleza del delito se debe examinar el testimonio de la demandante con extrema cautela, y que las pruebas de cargo deben sostenerse por sus propios méritos y no por la debilidad de las pruebas de la defensa; lo anterior quiere decir que el tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio de la víctima, referente a que la víctima no intentó rechazar al acusado, que no comprendieron por qué la víctima no había escapado cuando aparentemente había tenido diversas oportunidades de hacerlo, destacando la edad del acusado -de 60 años- y por tanto su fuerza y capacidad de impedirsele.

El Comité señaló que el uso de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justicia, y que las autoridades deben ser cautelosa en crear normas basadas en ellos; en el análisis de los argumentos del tribunal para su decisión, el referente a que “una acusación de violación puede hacerse con facilidad” refleja un perjuicio de género; que el hecho de que la víctima no intentara escapar o que no hubiera resistencia física no significa que no exista la violación. La sentencia muestra que se cuestionó la credibilidad de la víctima debido a numerosos estereotipos. Por ello reconoció los daños y perjuicios morales y sociales sufridos

por la víctima, y consideró que el Estado no cumplió con sus obligaciones violando los derechos de la autora, formulando como recomendaciones:

- Proporcionar indemnización adecuada a la autora
- Adoptar medidas eficaces para asegurar que los juicios por violación se resuelvan sin demoras
- Asegurar que todas las actuaciones judiciales en estos casos sean imparciales y justos, sin afectaciones de perjuicios o estereotipos sobre la sexualidad femenina y masculina
- Examinar la definición de violación en la legislación para centrarse en la falta de consentimiento
- Eliminar cualquier requisito en la legislación que disponga que el ataque sexual sea cometido por la fuerza o con violencia, y todo requisito de pruebas de penetración, así como reducir al mínimo la posibilidad de revictimizar al demandante
- Impartir formación y capacitación en la materia a magistrados, abogados y agentes de la ley¹¹⁶.

2. 2 Estándares Nacionales: Marco Interno Mexicano en materia de violencia contra la mujer

México se ha adherido a numerosos instrumentos internacionales referentes a los derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia de género, aumentando con ello los derechos reconocidos conforme al artículo 1° constitucional, que eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales firmados por nuestro país, e igual de importante, eleva a rango constitucional la obligación de todos los órganos de gobierno a la defensa, respeto y promoción de dichos derechos en el marco de sus competencias.

Es lo anterior lo que ha marcado la pauta para la promulgación de legislación y la implementación de políticas públicas en materia de igualdad de género, no discriminación y encaminadas a la erradicación de la violencia contra la mujer. Dentro del marco normativo mexicano, sin contemplar los delitos contra la mujer

¹¹⁶ *Ibidem*, pp. 419- 427.

contenidos en Códigos Penales locales y el Federal, se analizan las siguientes leyes y programas gubernamentales que contribuyen a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:

2.2.1 Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, esta ley se originó tras la elaboración de un diagnóstico en la materia por la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, con lo que presentaron un anteproyecto de ley al respecto¹¹⁷.

Su objeto es el de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Entre los aspectos importantes de esta ley se encuentran:

1. Establece la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, asignaciones para la promoción de acciones afirmativas en la materia.
2. Enumera, más no limita, lo que puede ser considerado como discriminación.
3. Da competencia a los poderes para adoptar las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas para garantizar la igualdad y no discriminación.
4. Crea al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con el objeto de coordinar las acciones conducentes a la eliminación de la discriminación, y establece sus facultades.

¹¹⁷Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “Hace 14 años se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2017, consultado el 21 de febrero de 2024 en <https://www.gob.mx/inafed/articulos/hace-14-anos-se-promulgo-la-ley-federal-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion#:~:text=El%20origen%20de%20esta%20ley,como%20un%20anteproyecto%20de%20ley.>

5. Determina que será por medio de la presentación de quejas presentadas ante el Consejo que se conocerá de los asuntos, y se impondrán las medidas administrativas y de reparación que la ley establece, conforme a un procedimiento ahí mismo definido¹¹⁸.

Dentro de las reformas realizadas a esta ley en el periodo analizado encontramos que se ampliaron los tipos de discriminación contemplados en el artículo 1°, así como los actos que se consideran discriminatorios en el artículo 9; en el artículo 15 Octavus amplía los supuestos y a las personas a las que se les pueden aplicar las acciones afirmativas; estas reformas se encuentran directamente dirigidas a lograr la igualdad sustantiva¹¹⁹.

2.2.2 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Esta ley se promulgó el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y contiene grosso modo, los principios y obligaciones de los servidores públicos, las faltas administrativas graves y no graves en que pueden incurrir, las sanciones aplicables para dichas faltas, y los procedimientos para su aplicación en materia administrativa, sin perjuicio de que de configurarse como delitos puedan ser perseguidos por la jurisdicción penal.

La relevancia de esta ley, claramente se encuentra en que contiene los mecanismos para la prevención, corrección e investigaciones de responsabilidades de autoridades administrativas, dentro de lo que se encuadran las obligaciones ligadas a los derechos humanos conforme al artículo 1ª constitucional.

Específicamente encontramos que en su artículo 57 señala como falta grave el abuso de funciones y lo define como el servidor o servidora pública que realice

¹¹⁸ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2003, Diario Oficial de la Federación, consultada el 21 de febrero de 2024 en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>

¹¹⁹ *Idem*.

conductas correspondientes a violencia política contra las mujeres conforme lo señalado en la LGAMVLV, y por consiguiente lo encuadra dentro de las faltas sancionables administrativamente.

2.2.3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

El 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo con ella las bases para integrar a la legislación y a las prácticas administrativas los mecanismos señalados en los instrumentos internacionales en materia de derechos de las mujeres, de la eliminación de la discriminación y la violencia¹²⁰.

Fue la primera ley que atiende las obligaciones internacionales adquiridas con la adhesión a la CEDAW, y establece que se debe promover el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra la discriminación de género. Resalta que en su artículo 3 señala que la transgresión a los principios y programas de esta ley se sancionan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) y las que fueren aplicables, lo que quiere decir que tanto los servidores públicos como la población deben de acatarla, y que existe responsabilidad administrativa para los primeros en caso de no hacerlo.

La ley incluye en sus disposiciones generales, al igual que la LFPED, la utilización de acciones afirmativas¹²¹; también considera la perspectiva de género y la transversalidad como conceptos importantes para lograr la igualdad entre mujeres

¹²⁰ Pérez Contreras, M. de M., *Comentarios a la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres*. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, México, 2010, 43(127), Consultado el 22 de febrero de 2024 en https://doi.org/https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332010000100012

¹²¹ Acciones Afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

y hombres, la cual además señala, que implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquier ámbito de la vida, generada por motivo del sexo.

Establece que debe haber una Política Nacional en la materia de Igualdad, que establezca acciones encaminadas a su logro en todos los ámbitos, y en su artículo 17 fracción VII señala que dicha política debe adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, como los son los estereotipos que fomentan la discriminación.¹²² Ese plan se llevaría a cabo con los instrumentos establecidos en su artículo 18, entre los que se enumeran el Sistema Nacional para la Igualdad, el Programa Nacional para la igualdad y su observancia bajo la responsabilidad del Ejecutivo Federal, específicamente a través de la coordinación del Instituto Nacional de las Mujeres, y bajo el monitoreo y evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos¹²³.

Es importante señalar que además de la legislación nacional, las 32 entidades federativas cuentan con su versión local, siendo las de Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas las últimas en publicarse, y haciéndolo entre los años de 2018 a 2020; estas leyes deben estar en armonía con la Ley General y establecer las responsabilidades de las autoridades locales en la materia.

2.2.4 Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia

El 1° de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se sancionan todos los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, al reconocer que tolerar la violencia permite su escala pudiendo llegar al máximo nivel que es el feminicidio, término incluido por primera vez como una violencia específica contra las mujeres. Esta ley fue llevada

¹²² Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, México, consultada el 26 de febrero de 2024 en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf>

¹²³ *Ibidem*, artículos 18, 20 y 21.

inicialmente como propuesta a la Cámara de Diputados por dos mujeres feministas como respuesta a los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua¹²⁴.

A partir de la publicación de la versión federal, también se han publicado las versiones locales en por lo menos 28 entidades federativas, dentro de un sistema que articula las acciones de todos los niveles de gobierno para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer y la garantía de los derechos de mujeres y niñas dentro de nuestro país.

La importancia o valor de esta ley radica en que dota al marco jurídico interno mexicano de definiciones de conceptos clave en el tema como lo son los tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial económica y sexual), sus modalidades, (en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, etc.), así como del hostigamiento y acoso sexual, y especialmente, es el primer documento legal que incluyó la violencia feminicida¹²⁵.

También tiene referencia expresa de que los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la CEDAW, la Convención Belém do Pará, y otros instrumentos internacionales en la materia¹²⁶.

Algunas de las reformas importantes en esta ley en el periodo analizado, es la adición de la violencia política en razón de género como modalidad de violencia contra la mujer, asignando leyes especiales para su sanción penal, electoral y

¹²⁴ Vianey Mejía, *Cinco datos que debes saber sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, México, consultado el 26 de febrero de 2024 en <https://coordinaciongenero.unam.mx/2022/02/cinco-datos-que-debes-saber-sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/#:~:text=En%202007%2C%20feministas%20mexicanas%2C%20entre,ejercida%20en%20todas%20sus%20formas.>

¹²⁵ INMUJERES, *Compilación legislativa para garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia*, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2008, p. 11.

¹²⁶ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007, artículo 5 fracción VIII.

administrativa¹²⁷; en segundo término, también se añadió el capítulo IV Ter, correspondiente a la violencia digital y mediática, capítulo que tuvo su origen gracias al reclamo social y al impulso ciudadano de Olimpia Coral Melo, de lo que ahora conocemos como Ley Olimpia, con lo que se realizaron una serie de reformas legislativas que reconocen y sancionan los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Esta ley establece a partir de su artículo 22 la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, como un conjunto de acciones gubernamentales coordinadas en situaciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, desde 2018 y hasta 2023 se han emitido 9 alertas, siendo las de Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco en 2018, Puebla y el Estado de México en 2019, y Guerrero y Baja California en 2021, de las cuales ninguna se encuentra vigente, sin embargo existen cinco procedimientos que aún están en trámite, siendo ellos los casos de la Ciudad de México, Chihuahua, Sonora tanto por violencia feminicida, como por agravio comparado, y Veracruz, por violencia feminicida¹²⁸.

De las medidas emitidas a raíz de las Alertas, se han emitido 587 medidas desde la declaratoria de la primera medida, de las cuales 18 han sido levantadas en los estados de Campeche, Estado de México, y Guerrero, pero 569 permanecen vigentes, de las cuales, a su vez, existen 110 medidas actualizadas en los estados de Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Nayarit, 13 nuevas para Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Nayarit, y 459 sin actualizar¹²⁹.

¹²⁷ *Idem*.

¹²⁸ Instituto Nacional de las Mujeres, *Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres*, México, 24 de octubre de 2021, consultado el 5 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>

¹²⁹ CONAHCYT, *Prevención, atención y erradicación de la Violencia de Género*, segunda edición del Seminario Permanente, sesión 5 “a 8 años de las alertas de violencia de género: un balance de resultados y desafíos”, CONAHCYT, México, emitido el 30 de enero de 2024, y consultado el 5 de marzo de 2024 en <https://www.youtube.com/watch?v=vv7zgJhc1sE>

La ley también comprende, en los numerales 27 y los siguientes, las órdenes de protección como actos de urgente aplicación para el interés de la víctima, las cuales son personalísimas e intransferibles, y que pueden ser administrativas, y jurisdiccionales¹³⁰.

Se integró al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas y al INE y finalmente, establece las facultades de cada nivel de gobierno y su coadyuvancia para el logro de los objetivos; en este punto cabe señalar que corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres el papel de Secretaría Ejecutiva del sistema, así como la integración de las investigaciones promovidas por la Administración Pública federal sobre violencia contra las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención y atención que se implementen, y en general la coordinación del sistema.

Otra medida gubernamental aquí contemplada son los refugios para víctimas de violencia como lugar seguro para las víctimas, donde se les proporcionen servicios especializados y gratuitos; en el mismo tenor se adicionó lo correspondiente a los centros de justicia para mujeres para diseñar y ejecutar acciones para la prevención y atención de violencia contra la mujer.

En síntesis, esta ley representa el eje y origen del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y el cumplimiento normativo de los compromisos adquiridos internacionalmente en la materia, donde se distribuyen las obligaciones y facultades a las autoridades, así como de diversas medidas disponibles en la materia.

¹³⁰ *Idem.*

2.2.5 Reglamento de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008, como su nombre lo menciona, esta normativa reglamenta la ley antes mencionada, estableciendo las bases para la coordinación entre los niveles de gobierno a través de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación de la Política Nacional.

Aquí es de especial importancia que se establece la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado, el cual se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o política pública contenga distinciones en detrimento de las mujeres, genere discriminación, lesione los derechos de las mujeres y los principios de igualdad y no discriminación; y también resalta que esta alerta puede ser presentada por organismos de derechos humanos internacionales, nacional, o de las entidades federativas, así como las organizaciones de sociedad civil legalmente constituidas¹³¹.

2.2.6 Programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Este programa se originó con la adición de la fracción XIV bis al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2006; en principio era el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y se creó como instancia especializada de la Comisión en observación y monitoreo de la política nacional en la materia. En 2011 hubo una nueva estructura orgánica, y para 2012 se creó la que hasta ahora opera en el PAMIMH, adscrita a la Cuarta Visitaduría de la Comisión¹³².

¹³¹ *Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2008.

¹³² Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Antecedentes del PAMIMH*, consultado el 4 de marzo de 2024 en <https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Conocenos/Antecedentes>

Este programa se rige por diversos instrumentos normativos nacionales, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 102 apartado B párrafo cuarto; por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus artículos 6, 15, 34, 44, 46 y 50; el Código de Ética de la CNDH, su Reglamento Interno, y por supuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia¹³³.

La CNDH a través del Programa, participa en el mecanismo de Alerta de Violencia de Género comprendido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2.2.7 Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

Se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual es el encargado del diseño de la política nacional en la materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer; es a través de este órgano que el gobierno coordina a los niveles de gobierno y se busca el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia; también da seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres¹³⁴.

2.2.8 Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres (PIPASEV)

El 30 de diciembre de 2021 fue publicado este programa con el objetivo de fortalecer los esfuerzos en la materia conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a

¹³³ Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Marco Normativo del PAMIMH*, consultado el 4 de marzo de 2024 en https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Normatividad/Igualdad_Mujeres_Hombres

¹³⁴ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, *¿Qué hacemos?*, consultado el 05 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos>

una Vida Libre de Violencia; se creó a raíz de que la Administración a cargo consideró que era necesario centrar los esfuerzos para la prevención de la violencia de género.

En este programa parece importante destacar el reconocimiento de que quienes prestan servicios de atención especializada para las mujeres víctimas de violencia no cuentan con contención emocional, lo que a la larga puede afectar la calidad de los servicios prestados; también reconoce la ausencia de capacitación especializada – como es el caso de personal policial- y de realizar un análisis profundo para una correcta medición de los riesgos reales que enfrentan las víctimas, para la apropiada instrumentación de las medidas de protección disponibles. Finalmente, reconoce que el modelo de atención implementado no ha cumplido el mandato legal, y que no se ha hecho lo suficiente¹³⁵.

También expone que a pesar de la existencia de la LGAMVLV y otras leyes, es necesaria la coordinación efectiva y un marco normativo armonizado, poniendo como ejemplo que a pesar de que en la Ley General se reconocen los distintos tipos y modalidades de violencia, las violencias se han diversificado, y algunas de ellas no se encuentran recogidas en la legislación, como es la violencia obstétrica¹³⁶, o no hay armonización entre las leyes locales y las nacionales, como el caso de la ley Olimpia, o el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Este documento afirma que el mismo programa adopta una perspectiva interseccional como eje fundamental, y plantea como objetivos prioritarios los siguientes: disminuir las violencias contra mujeres, promover servicios de atención integral especializada interseccional e intercultural a mujeres víctimas de la violencia, fomentar la impartición de justicia con perspectiva de género asegurando la sanción, reparación del daño y no repetición, e impulsar acciones de coordinación para institucionalizar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Todo lo anterior lo desarrolló por medio de 14 estrategias específicas, que a su vez cuentan

¹³⁵ *Programa Integral para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024*, Diario Oficial de la Federación, México, 30 de diciembre de 2021.

¹³⁶ *Idem*.

con 112 acciones, donde se señala puntualmente las dependencias o entidades que coordinarán las acciones, así como las que las implementarán. Por último, plantea una serie de metas o parámetros a evaluar y los periodos en que se realizará dicha evaluación¹³⁷.

2.2.9 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 que establece los requisitos para la certificación de las prácticas de igualdad laboral entre mujeres y hombres

Esta norma busca la igualdad e inclusión laborales, creando condiciones de trabajo libre de discriminación que posibilite la realización plena de mujeres y hombres; establece los requisitos para que las organizaciones que tienen trabajadores en el territorio mexicano obtengan una certificación que compruebe que sus prácticas laborales respetan la igualdad y no discriminación, así como la accesibilidad laboral de mujeres y hombres.

Dentro de estos requisitos destacan la utilización de lenguaje no sexista, regulación que prevenga y sancione prácticas de discriminación, los porcentajes de la plantilla laboral respecto de cada sexo, y una brecha salarial menor a 20 puntos porcentuales, así como brecha en el porcentaje en los cargos directivos menor a 20 puntos porcentuales, prohibición de exámenes de no gravidez y VIH como requisito de contratación, que no haya diferencia en los promedios salariales de hombres y mujeres, igualdad de prestaciones por sexo, entre otros¹³⁸.

2.2.10 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¹³⁷ *Idem*.

¹³⁸ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, *Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 Para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres*, México, 2009, p.p. 15- 40, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf>

El primer protocolo se publicó en 2013 en atención a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otras, Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, con el propósito de crear un método analítico para los casos en que los que el género fuese trascendental en el litigio, con un impacto diferenciado para las mujeres y niñas afectadas por ellos. Este esfuerzo fue retomado en el amparo directo en revisión 2655/2013, el cual sentó las bases metodológicas para juzgar con perspectiva de género para el Poder Judicial de la Federación¹³⁹; el protocolo fue actualizado en 2020, con los avances y la evolución en la materia tanto del Máximo Tribunal, como de los estándares internacionales, mediante un proceso consultivo con participación de autoridades jurisdiccionales, académicos y expertos, así como sociedad civil.

Si bien este documento contiene un catálogo de conceptos clave vinculados con la perspectiva de género, entre los cuales aparecen algunos de los presentados en este documentos, y también presenta la evolución de la doctrina nacional e internacional de la perspectiva de género, es importante resaltar que su propósito final es fungir como guía práctica para los operadores de derecho encargados de la impartición de justicia, presentando las obligaciones previas y de fondo que tienen que considerar los juzgadores para resolver las controversias que se les presentan, incluyendo en la etapa de sentencia.

2.2.11 Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo¹⁴⁰

Teniendo como antecedente la reforma constitucional en materia laboral del año 2019, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social presenta una propuesta para

¹³⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género*, Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN, México, 2020, p. XV.

¹⁴⁰ Secretaría de Trabajo y Previsión Social, *Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo*, México, 2020.

atender los casos de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual para los centros de trabajo con perspectiva de derechos y de género para el logro de un trabajo digno conforme lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Su objetivo es definir los mecanismos de la atención a las víctimas de violencia laboral y promover una cultura de igualdad de género y un clima laboral dentro de los centros de trabajo libre de violencia. Para alcanzar dichos objetivos se propone en primer lugar, la creación en los centros de trabajo, de un comité de atención y seguimiento, con representantes de las diversas áreas de responsabilidad, así como con conocimiento en perspectiva de género y derechos humanos, así como con consejeros; las personas antes mencionadas son las encargadas de emitir los protocolos en materia de prevención y atención de casos de violencia laboral, así como la atención de dichos casos.

El Comité de Atención y Seguimiento de cada centro de trabajo puede aplicar medidas de protección y medidas de modificación de la conducta, ambas con el fin de evitar daños irreparables, y pueden implementarse sin petición de la presunta víctima.

2.2.12 La Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos

Se refiere al proyecto educativo impulsado por el gobierno federal para la reorientación del Sistema Educativo Nacional de los niveles de educación personal preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de impulsar transformaciones sociales dentro de las escuelas y comunidades. Dentro de sus prioridades establece la educación para todas y todos, y la garantía del acceso a la educación de una manera universal, incluyente y equitativa; se resalta la inclusión como eje articulador la igualdad de género¹⁴¹.

¹⁴¹ Hernández Moreno M., *La nueva Escuela Mexicana y su Impacto en la Sociedad*, Secretaría de Educación Pública, México, p. 4-16, consultada el 12 de febrero de 2025 en chrome-

Lo anterior se planteó por medio de los nuevos libros de texto gratuitos, implementándose a partir del ciclo escolar 2023- 2024, incorporando en ellos y en los planes de estudio de manera transversal la perspectiva de género. Cabe destacar que este programa es el único de novedosa propuesta, creación e implementación por parte del gobierno federal del periodo analizado.

2.3 Jurisprudencia Nacional relacionada con los derechos humanos de las mujeres

Este apartado mencionará diversos criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que pueden ser usadas como orientadoras, dentro del sistema normativo interno mexicano, que ya sea que se refieren a la violencia contra la mujer expresamente, o cuyo contenido tiene un impacto en la garantía de protección del derecho a una vida libre de violencia.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Tesis de jurisprudencia 57/2021, determinó inconstitucionales las cláusulas contractuales de los convenios de divorcio que fomentan la distinción entre mujeres y hombres, en función de las normas sociales y culturales, pues violan los derechos a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres, lo anterior debido a que promueven un régimen de opresión en perjuicio de las mujeres. Todo ello significa que en la celebración de estos convenios existe la obligación de evitar que el sistema patriarcal permee en dicha actividad¹⁴².

En este mismo tópico, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito a través del Amparo directo 123/ 2021 determinó ilegal la renuncia anticipada de gananciales de la sociedad conyugal en el caso de que exista una

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/La-NEM-y-su-impacto-en-la-sociedad.pdf.

¹⁴² , Sentencia sobre el amparo directo 9/2021 sobre convenios de divorcio, registro digital 2023934, Tesis 1ª/J.57/2021 (11ª), Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 29 de septiembre de 2021, consultada el 15 de mayo de 2024 en <https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/0IFLpn0BNHmckC8Laath/%22Derecho%22>

relación asimétrica intergenérica de poder en detrimento de la persona que renuncia (mujer) aunque el acto se identifique con otro acto, y aparente tener propósitos legales; su justificación se basó en la obligación de los órganos jurisdiccionales de impartir justicia con perspectiva de género, y tomando en cuenta la afectación diferenciada de las normas, lo que en este caso permite detectar la relación desigual en detrimento de la mujer, que por un lado invisibiliza y subordina a la mujer en torno a las decisiones sobre el patrimonio de la sociedad conyugal, al mismo tiempo que mantiene al hombre en posición de dominio ; así mismo, explica que la autonomía de la voluntad no puede ser pretexto para justificar la violación de otros derechos fundamentales¹⁴³.

En Tesis aislada derivada del Amparo directo en revisión 5465/2014 de la Primera Sala, se estableció en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, que el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, interrelacionado con sus derechos a la integridad y dignidad personales, la igualdad y no discriminación, constituyen límites válidos a la aplicación de normas de derecho consuetudinario indígena¹⁴⁴.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reitera mediante tesis aislada I.9º.P16 P (11º) que las autoridades estatales tienen la obligación constitucional, convencional y lega de adoptar las medidas de protección necesarias

¹⁴³ Sentencia sobre el amparo directo 123/2021 sobre renuncia anticipada de gananciales de la sociedad conyugal, registro digital 2028496, tesis aislada IV. 1º. C. 6. C. (11ª), Tribunales colegiados de Circuito, Ponente: Helmuth Gerd Putz Botello, 10 de febrero de 2023 consultado el 15 de mayo de 2024 en <https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/aLZu4o4BXVRzDR5ETI6u/%22Ilegalidad%22>

¹⁴⁴ Sentencia sobre el amparo directo en revisión 5465/2014 sobre derecho de las mujeres, derechos indígenas y derechos de la niñez, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 26 de abril de 2017, consultado el 15 de mayo de 2024 en https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/hTDv3XgB_UqKst8o84Rf/%22Interpretaci%C3%B3n%20cultural

para mujeres víctimas de delitos cometidos en contexto de violencia, a fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo que comprometa su integridad¹⁴⁵.

Por último, parece importante mencionar la tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, en la que se determinó que en caso de que la Defensoría de Derechos Humanos (en este caso de Oaxaca) sea omisa para solicitar la activación de la alerta de violencia de género en la entidad, una mujer tiene el interés jurídico para promover una demanda de amparo por solo tener el carácter de mujer¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Sentencia sobre el Incidente de suspensión en revisión 111/2021 sobre medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, registro digital 2023785, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Ponente: Ricardo Paredes Calderón, 12 de noviembre de 2021, consultada el 16 de mayo de 2024 en <https://egaceta.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023785>

¹⁴⁶ Sentencia sobre la Queja 193/2017 sobre la en interés legítimo para solicitar la alerta de violencia de género, registro digital 2015417, Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Ponente: Jaime Allier Campuzano, 27 de octubre de 2017, consultada el 13 de enero de 2025 en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015417>

CAPÍTULO III

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO

Este capítulo se propone realizar un análisis y evaluación de los esfuerzos realizados tanto en materia legislativa como gubernamental para el logro del objetivo de la erradicación de la violencia contra la mujer, pero sobre todo la efectividad de dichos esfuerzos, los resultados obtenidos por el gobierno plasmados en los datos más actualizados en esta materia, para así lograr el objetivo final planteado en esta investigación, es decir, obtener información objetiva y cuantitativa que permita concluir si existe algún progreso o resultados positivos visibles y palpables en la materia, con la intención de que sirva como una pequeña aportación a los ámbitos académico, jurídico y social.

Es así como en el primer apartado del capítulo se avoca a las diversas leyes, mecanismos y programas aprobados e impulsados en el periodo acotado, tanto en el ámbito federal, como algunos que iniciaron como esfuerzos locales y que en el transcurso del tiempo se han extendido a algunas otras entidades federativas, con la intención precisamente de que se lleve a la armonización en todo el territorio; por su parte, dentro del análisis estadístico, se utilizaron las bases de datos gubernamentales y no gubernamentales que contenían datos de fechas cercanas o coincidentes con el inicio del periodo delimitado así como del final del sexenio o de la fecha más cercana a la elaboración de esta investigación, con la finalidad de contar con datos comparables.

3.1 Análisis de la legislación y políticas mexicanas sobre violencia contra la mujer creadas en el periodo 2018-2024

La violencia ejercida en contra de las mujeres, como se ha mencionado, tiene una raíz estructural desde la desvalorización de la sociedad y de una cultura prominentemente patriarcal a nivel nacional e internacional. En este apartado se presentarán las medias que se han tomado en presentación de reformas, adiciones,

la creación de distintas leyes mexicanas tanto federales como locales que se han impulsado principalmente en el periodo analizado, con impacto en los derechos de las mujeres de forma directa o indirecta.

Sin embargo, es importante mencionar que estos esfuerzos gubernamentales deben acompañarse de un cambio de fondo en la cultura mexicana y latinoamericana, pues es en estos países donde se localizan los índices más altos de feminicidios¹⁴⁷, derivado de una ideología de superioridad masculina como base para la violencia en contra de la mujer.

3.1.1 Ley Olimpia

Se trata de un conjunto de reformas que se realizaron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para reconocer la violencia digital, así como para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas en los medios digitales¹⁴⁸.

Estas reformas surgen desde la iniciativa ciudadana, impulsada por mujeres jóvenes, colectivos y activistas, a raíz de que Olimpia Coral Melo, mujer poblana originaria de Huachinango, fue víctima de la difusión viral de un video suyo con contenido sexual sin su consentimiento, lo que trajo consigo rechazo y juicio social, violencia comunitaria, estructural e institucional, por lo que acudió al Ministerio público a buscar justicia solo para ser revictimizada por las autoridades, y para que le señalaran que lo que le pasó no era un delito. Fue a raíz de este contexto que

¹⁴⁷García, Ana Karen. (2018, 20 de noviembre). 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. El Economista, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-de-genero-14-de-los-25-paises-del-mundo-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina-20181120-0048.html>

¹⁴⁸ Procuraduría Federal del Consumidor, *La "Ley Olimpia" y el combate a la violencia digital*, 26 de abril de 2021, México, consultado el 07 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~:text=Es%20un%20conjunto%20de%20reformas,digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolencia.>

luchó para lograr cambiar la legislación mexicana para que se reconociera esta modalidad de violencia y se sancionara¹⁴⁹.

La Ley Olimpia Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2021, y comprende adiciones a disposiciones a la LGAMVLV y al Código Penal Federal, entre las cuales:

- a) Se adiciona un capítulo IV Ter denominado “De la Violencia Digital y Mediática” al título II compuesto por los artículos 20 Quáter, 20 Quinquies y 20 Sexties, donde se define la violencia digital, la violencia mediática, y las obligaciones de las autoridades en caso de estos tipos de violencia.
- b) Se adiciona un Capítulo II denominado “Violación a la Intimidad Sexual” al Título Séptimo Bis denominado “Delitos contra la Indemnidad de la Privacidad de la Información Sexual”, compuesto por los artículos 199 Octies, 199 Nonies y 199 Decies al Código Penal Federal donde se tipifican los delitos de violación a la intimidad sexual y se imponen las sanciones correspondientes a pena de 3 a 6 años de prisión y multa de quinientas a mil UMAs; también se señalan las agravantes de este delito¹⁵⁰.

Aunque exista esta legislación federal, los delitos contra la intimidad sexual son delitos del fuero común, lo que significa que, en primer lugar, solo se regulan los espacios de competencia federal, como zonas federales y aduanas, y en segundo lugar, que para que sean perseguidos en los estados del país, se debe hacer conforme a la legislación local del lugar en que ocurrieron: por ello dentro del artículo transitorio de la reforma, se mandata a las entidades federativas a realizar las

¹⁴⁹ Gobierno de la Ciudad de México, *Manual de Contenidos Laboratorio de Análisis Multidisciplinario “Sobre Ley Olimpia”*, Ciudad de México, p. 3, consultado el 7 de marzo de 2024 en https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ViolenciaDigital/Manual_Contenidos_Lab_Ley_Olimpia.pdf

¹⁵⁰ *Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal*, Diario Oficial de la Federación, 1° de junio de 2021, consultado el 7 de marzo de 2024 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619905&fecha=01/06/2021#gsc.tab=0

adecuaciones legislativas correspondientes en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su entrada en vigor¹⁵¹.

Las entidades que han realizado dichas adecuaciones son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas¹⁵².

La Ley Olimpia se publicó en la Gaceta Oficial en la Ciudad de México el 22 de enero de 2020, con la modificación tanto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México así como del Código Penal del Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México, donde además de lo similar al caso federal se adicionó dentro de los delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio, en el capítulo sobre amenazas, una modalidad agravada al triple cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño. También en el capítulo sobre extorsión se adiciona como extorsión agravada en una mitad en el caso de usarse como medio comisivo la vía telefónica, correo electrónico o comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo¹⁵³.

Este conjunto de reformas fue uno de los primeros logros de la sociedad civil organizada y especialmente del Frente Nacional para la Sororidad, y tiene gran importancia dado que colocó un tema que era invisible para las autoridades, y ha sido llevado a la agenda no solo de nuestro gobierno federal y a los gobiernos locales, sino a foros internacionales y a otros países, como es el caso de Argentina, Honduras, Ecuador e incluso Estados Unidos.

¹⁵¹ *Ibidem*. Transitorio Segundo.

¹⁵² *Idem*.

¹⁵³ *Ibidem*. P. 6

3.1.2 Ley Ingrid

Al igual que la Ley Olimpia, las propuestas y leyes presentadas con este nombre surgieron como reconocimiento, en este caso, de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio el 9 de febrero de 2020, así como de las víctimas cuyos derechos y dignidad fueron vulnerados, pues hubo una difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de su feminicidio.

Como respuesta al caso, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, y tipificar las conductas de servidores públicos que de manera indebida revelen o difunda imágenes, videos o información de la carpeta de investigación, y combatir la violencia de género mediática. Lo anterior porque cuando una persona servidora pública hace uso indebido de esta información se acrecienta la normalización de la violencia contra las mujeres, y vulnera la dignidad de las víctimas¹⁵⁴.

El decreto por el que se adicionó el artículo 293 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal se publicó el 26 de febrero de 2021 en la Gaceta Oficial, imponiendo pena de prisión de 2 a 6 años a quien realizara dichas conductas, y estableciendo como agravante la finalidad de menoscabar la dignidad de las víctimas o sus familiares, cuando se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o se trate de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima¹⁵⁵.

En 2023 se aprobó por unanimidad por el Senado un proyecto de ley en este sentido que busca modificar el Código Penal federal, sancionando los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, particularmente a los funcionarios que filtren imágenes de víctimas de violencia, para garantizar la

¹⁵⁴ *Ley Ingrid*, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consultada el 8 de marzo de 2024, en https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/comunicacion/infografias/Ley_ingrid_.pdf

¹⁵⁵ *Idem*.

seguridad, intimidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas y sus familias, sin embargo, esto aún no se ha vuelto realidad como ley a nivel federal.¹⁵⁶

3.1.3 Ley Malena

Se refiere a una propuesta planteada desde finales de 2022 a raíz del ataque contra María Elena Ríos, estudiante de música y activista, a quien arrojaron ácido con intención de matar, pero que logró sobrevivir; esta propuesta busca para castigar de forma específica la violencia con ácido, violencia que han sufrido al menos 39 mujeres, aunque existen casos de agresiones similares con agentes corrosivos, de los que se registraron 105 casos en 2022 de los cuales solo se interpusieron 28 denuncias, según datos de la Fundación Carmen Sánchez¹⁵⁷.

El 2 de marzo de 2023 el pleno del Congreso de Puebla aprobó esta propuesta consistente en la reforma de diversas disposiciones de la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado, así como el Código Penal del Estado, para tipificar los ataques con ácido como feminicidio en tentativa con penas de 26 a 40 años de prisión¹⁵⁸.

El Decreto fue publicado el miércoles 8 de marzo de 2023, y entró en vigor al día siguiente, reformando las fracciones II a VII del artículo 10, y adicional la fracción VIII al artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

¹⁵⁶ Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social, “Ley Ingrid” sanciona filtración de imágenes de víctimas; no es una mordaza para periodistas: Sánchez Cordero, Número 093, 15 de septiembre de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/6779-ley-ingrid-sanciona-filtracion-de-imagenes-de-victimas-no-es-una-mordaza-para-periodistas-sanchez-cordero#:~:text=La%20presidenta%20de%20la%20Comisi%C3%B3n,im%C3%A1genes%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia.>

¹⁵⁷ Chávez P., “Ley Malena, en búsqueda de un castigo para los agresores con ácido”, Gaceta UNAM, México, 9 de marzo 2023, consultado el 08 de marzo de 2024 en <https://www.gaceta.unam.mx/ley-malena-en-busqueda-de-un-castigo-para-los-agresores-con-acido/>

¹⁵⁸ Almanza E., Ley Ácida: Esto sabemos de la nueva reforma aprobada en Puebla, El Financiero Sección Estados, 02 de marzo de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en <https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/03/02/ley-acida-esto-sabemos-de-la-nueva-reforma-aprobada-en-puebla/#:~:text=El%20pleno%20del%20Congreso%20Local,los%2040%20a%C3%B1os%20de%20prisi%C3%B3n.>

Violencia del Estado de Puebla, así como adiciona un párrafo al artículo 338 Quinquies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla¹⁵⁹.

En estas reformas se añade la violencia ácida como “todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas”; en cuanto al Código Penal, se tipifica como tentativa de feminicidio a las lesiones causadas por dicha violencia¹⁶⁰.

Por su parte, la Ciudad de México se presentó la propuesta el 31 de enero del 2023, y publicó las reformas referentes a esta misma ley apenas el 19 de febrero de este año; se reformó la fracción LL del artículo 6 y la fracción V del artículo 36 así como se adicionó la fracción XI al artículo 6 y la fracción V Ter al artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; y se deroga la fracción V del artículo 131, se adicionó el capítulo II Bis sobre Lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, al Título Primero sobre Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el acceso a una vida Libre de Violencia del Código Penal para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México¹⁶¹.

Si bien el objetivo ha sido lograr estas reformas a nivel federal, y de hechos la propuesta fue presentada ante el Senado de la República el 24 de mayo de 2023, aún no es una realidad, aunque ya hay varias entidades federativas que han legislado al respecto¹⁶².

¹⁵⁹ Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, miércoles 8 de marzo de 2023, Tomo DLXXV Número 6, Segunda Sección, Gobierno del Estado, Poder Legislativo, consultado el 8 de marzo de 2024, en https://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_2_08032023_C.pdf

¹⁶⁰ Periódico Oficial... *Cit.*

¹⁶¹ Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de febrero de 2024, Poder Ejecutivo, p. 4, consultada el 8 de marzo de 2024 en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b9501d1361289d53faf96fa9814ff422.pdf

¹⁶² Hernández Mora C. y Cravioto Romero C.S., *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, adiciona una fracción VII al artículo 6 y reforma los incisos a) y b) de la fracción XII del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; adiciona un Capítulo I Bis Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, que comprende los artículos 301 Bis, 301 Ter y 301 Quáter al Código penal Federal y modifica el artículo 36 y recorres los actuales 36 y 37 de la Ley General de Víctimas en materia de*

3.1.4 Ley 3 De 3 Contra La Violencia

Esta Ley prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a morosos en el pago de pensiones alimentarias. Las reformas se plantearon para incidir favorablemente en la ética pública y en la política. Con la aprobación en la Cámara de Diputados en marzo, y en el Senado en abril de 2023, de dicha reforma constitucional, se remitió a las legislaturas locales para completar el procedimiento legislativo¹⁶³.

El decreto de esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2023, y entró en vigor al día siguiente de su publicación; en él se reformaron y adicionaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público. Con su entrada en vigor se suspendieron los derechos para trabajar en el Gobierno a quienes tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, así como por ser declarada persona deudora alimentaria morosa, y añade como requisito para ser titular de la Fiscalía General de la República no haber sido condenada por delito doloso¹⁶⁴.

Es importante mencionar que esta ley será aplicada por primera vez en el proceso electoral de 2024, lo que significa que ninguna persona podrá registrarse como candidata para ocupar cargo de elección popular si se encuentra en alguno de los supuestos comprendidos en esta reforma.

violencia ácida, denominada "Ley Malena", 24 de mayo de 2023, consultada el 8 de marzo de 2024 en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-05-24-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Citlalli_Hdez_Sen_Cravioto_Ley_MALENA.pdf

¹⁶³ Senado de la República Coordinación de Comunicación Social, *Pleno del Senado aprueba "Ley 3 de 3" remite el documento a las legislaturas estatales*, Número 1305, 28 de abril de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/5878-pleno-del-senado-aprueba-ley-3-de-3-remite-el-documento-al-ejecutivo>

¹⁶⁴ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 29 de mayo de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690265&fecha=29/05/2023#gsc.tab=0

3.1.5 Ley Sabina

Se trata de una reforma impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, quien, siendo madre de Sabina, luchó para que el padre de la niña afrontara sus responsabilidades económicas; con ella se busca obligar a los deudores alimentarios a cumplir la obligación de satisfacer las necesidades de sustento de sus hijos. Para ello se reformó la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer los derechos alimentarios de alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica, entre otros; también se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es el padrón que contiene la información de quienes dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por tres meses consecutivos o cinco meses alternados, que serán registrados como deudores alimentarios morosos, y que es un registro público¹⁶⁵.

Con la operación de este registro, se podrá impedir que las personas que incumplen dichas obligaciones puedan salir del país, tramitar licencias de manejo, ocupar cargos en el servicio público y realizar operaciones de compraventa de inmuebles¹⁶⁶.

3.1.6 Ley Monzón

La iniciativa de la ahora ley Monzón se presentó inicialmente en Puebla en honor a la activista y abogada Cecilia Monzón, quien fue víctima de feminicidio el 21 de mayo de 2022 por su expareja; con ella se busca la suspensión inmediata de la custodia de los padres en el momento en que sean vinculados a proceso por el

¹⁶⁵ Yáñez B., *Ley Sabina: así funcionará el registro nacional de obligaciones alimentarias*, Expansión, 28 de marzo 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://politica.expansion.mx/sociedad/2023/03/28/ley-sabina-que-es>

¹⁶⁶ Senado de la República, *Registro de deudores alimentarios deberá operar en marzo de 2024, señala estudio del IBD*, Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, 13 de agosto de 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/6488-registro-de-deudores-alimentarios-debera-operar-en-marzo-de-2024-senala-estudio-del-ibd#:~:text=estudio%20del%20IBD-,Registro%20de%20deudores%20alimentarios%20deber%C3%A1%20operar%20en,2024%2C%20se%C3%B1ala%20estudio%20del%20IBD&text=La%20medida%20surge%20de%20una,ni%20tramitar%20licencias%20de%20manejo.>

delito de feminicidio o tentativa del mismo, lo que significa la pérdida definitiva de la patria potestad del padre en el momento en que se le declare culpable de feminicidio, protegiendo el interés superior de las infancias¹⁶⁷.

En el caso poblano la ley modificó tanto el Código Civil estatal en materia de patria potestad, y también reformó el Código Penal, agravando las sanciones para el feminicidio en el caso de ser cometido frente a los hijos de la víctima, supuesto en el que la pena oscila entre los 50 y 70 años de prisión. La ley ha sido aprobada a nivel estatal en Puebla, Sinaloa, Colima y Ciudad de México, y ha sido presentada en Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Durango¹⁶⁸.

3.1.7 Leyes En Materia De Violencia Obstétrica

A nivel federal hasta 2022, ni la Ley General de Salud ni la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer contemplaban la violencia obstétrica, y solo se podía considerar regulada en algún grado a este nivel en la Norma Oficial Mexicana 007-SSA-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y a la persona recién nacida, la cual contiene obligaciones que el personal de salud debe seguir para disminuir las actitudes y actividades que puedan considerarse violencia obstétrica, sin embargo, la única referencia explícita se encuentra en el numeral 5.5.3 que contempla la obligación de que ninguna persona prestadora de servicios puede discriminar o ejercer violencia hacia la mujer durante el trabajo de parto¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Barragán Almudena, “Ley Monzón, Puebla se convierte en el primer Estado en quitar la patria potestad a los feminicidas”, El País, 2 de marzo 2022, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://elpais.com/mexico/2023-03-02/ley-monzon-puebla-se-convierte-en-el-primer-estado-en-quitar-la-patria-potestad-a-los-feminicidas.html>

¹⁶⁸ Camacho M., “Avanza la Ley Monzón en 17 estados del país, de los cuales en cuatro ya se aprobó, La Jornada de Oriente, México, 7 de agosto 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/avanza-ley-monzon-en-17-entidades-federativas-del-pais/>

¹⁶⁹ Cobo Armijo, M. F. et. al., *La violencia obstétrica y las normas oficiales mexicanas: Una oportunidad para mejorar la implementación desde las violaciones reportadas por el personal de cuatro hospitales generales de la Ciudad de México*, México, Jurídica Ibero, 2023, año 7, núm. 14, enero-junio, p. 17.

La LGAMVLV es omisa en indicar la violencia obstétrica de forma explícita, in embargo si se puede encuadrar en figuras ya existentes como la violencia psicológica, física, sexual o alguna análoga dentro de las que se encuentran en esta ley.

Dentro de las legislaciones estatales, 24 entidades han incorporado la definición explícita de esta violencia, y siete estados la tipifican como delito, siendo los últimos Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.¹⁷⁰

Dentro del Programa Sectorial de Salud (PROSESA), el Programa de Acción Específico sobre salud sexual y reproductiva 2020-2024 busca diseñar acciones para prevenir y atender este tipo de violencia de género y violencia sexual, y en la materia de violencia obstétrica, se regula el favorecimiento de mecanismos institucionales para la promoción del trato digno y respetuoso en salud reproductiva¹⁷¹.

3.1.8 Modelo de Protocolo Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su búsqueda de promover el trabajo digno y ambientes laborales sanos, y en cumplimiento a la reforma a la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019, implementó este modelo para la atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual laboral¹⁷².

Este protocolo busca establecer acciones en aras de prevenir, atender y erradicar los casos de violencia laboral y es aplicable a los centros de trabajo que se

¹⁷⁰ GIRE, “Entidades que penalizan la Violencia Obstétrica”, Limón, 2018, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://gire.org.mx/plataforma/entidades-que-penalizan-la-violencia-obstetrica/>

¹⁷¹ Secretaría de Salud, *Programa de Acción Específico: Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024*, 2021.

¹⁷² Alcalde Luján L.M., *Presentación del Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo*, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, marzo 2020, p. 5.

encuadran en el apartado A del artículo 13 constitucional y responde al marco constitucional, convencional y legal de nuestro país y es de naturaleza obligatoria para dichos centros de trabajo. Crea un mecanismo de atención de presuntas víctimas de este tipo de violencia con la debida diligencia que se establece por el Ministerio Público para los casos de violencia de género, el cual requiere que se asegure la aplicación efectiva del marco legal vigente, y de políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias¹⁷³.

Este mecanismo funciona a través de la creación de un Comité de Atención y Seguimiento en los centros de trabajo cuya función será la adopción del protocolo, la sensibilización y capacitación en la materia del personal, analizar las quejas y casos de violencia laboral y difundir la vía y procedimiento de atención; por otro lado, los casos de violencia se podrán comunicar y resolver, según cada caso concreto, a través del Comité del centro de trabajo, de la PROFEDET, de los Centros de Conciliación, o de los Juzgados Laborales.¹⁷⁴

3.1.9 Asignación de recursos públicos para la Erradicación de la violencia de género

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación que se realiza anualmente para la asignación de recursos públicos, y específicamente en el Anexo 13, se encuentran los recursos específicamente asignados para garantizar la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres¹⁷⁵; por una parte, a partir del año 2018 se observó un incremento en el presupuesto para esta rama, pasando de los 37,757 millones de pesos de 2017, hasta 348,362 millones de pesos asignados para 2023, sin embargo, al analizar dentro de este rubro la distribución de recursos a las instituciones, programas y acciones específicas para la erradicación de la violencia de género se observa que por lo menos para 2023, tan solo el 7.0% del total le fue

¹⁷³ Op. Cit. *Modelo de protocolo...* p. 15.

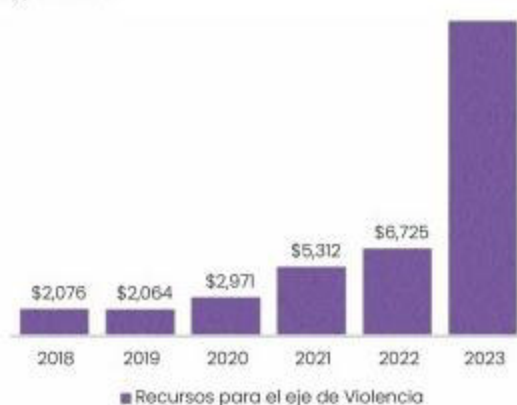
¹⁷⁴ *Alcalde Luján L. M.*, Op. Cit. p. 20.

¹⁷⁵ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 29 de noviembre de 2017, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2018/PEF_2018_orig_29nov17.pdf

asignado, lo que corresponde a 2,438,534 millones de pesos, contra el 92% asignado a la promoción de la igualdad donde es importante destacar además, que la mayoría de los recursos se han destinado a programas de becas, de pensiones, y en general programas “para el Bienestar”¹⁷⁶.

Presupuesto eje de Violencia

Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023



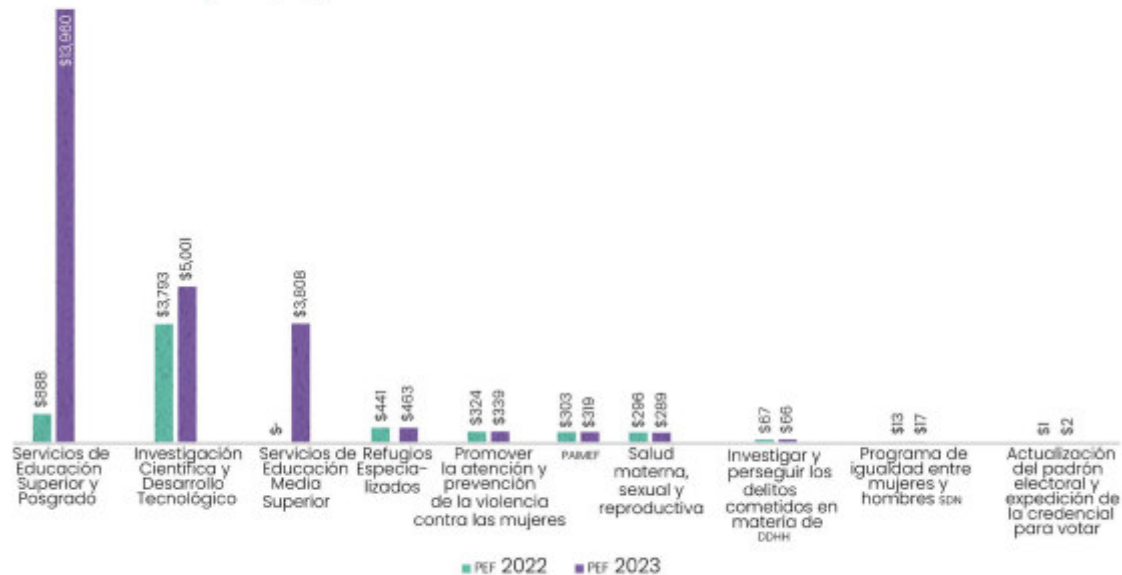
*FUENTE: “Presupuestos etiquetados” en fundar.org.mx

Aún más importante es que dentro del Eje de Erradicación de violencia, los programas con mayores recursos son los de Servicios de Educación e Investigación que reviven más del 85% de estos recursos, dejando programas como los de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de violencia, Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, salud reproductiva, investigación de delitos cometidos en materia de derechos humanos, entre otros, con cifras desde el 1.9% hasta el 0.0%.

¹⁷⁶ Centro de Análisis e Investigación, *Presupuestos etiquetados, Análisis del Anexo Transversal 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres*, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Ciudad de México, 2022, p-10, consultado el 07 de agosto de 2025 en https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/Genero_PEF2023.pdf

Presupuesto aprobado (2022) y propuesta (2023) para programas seleccionados del eje de Violencia

Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023



*FUENTE: "Presupuestos etiquetados" en fundar.org.mx

En este sentido, también se observó el debilitamiento en el presupuesto con las adecuaciones presupuestarias realizadas por ejemplo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual sufrió desviaciones en 2023 por aproximadamente 92 millones de esos de los 340 inicialmente asignados, mismo caso para los programas de atención y prevención de violencia contra las mujeres, el Programa de Refugios Especializados, e incluso el Instituto Nacional de las Mujeres¹⁷⁷.

Un pequeño análisis exclusivamente en cuanto a los procesos legislativos, así como a los programas y acciones gubernamentales presentados en este apartado, se observa en primer término, una tendencia a la legislación reactiva más que preventiva en la materia de la violencia, pues lo que es fácilmente detectable es la cantidad de leyes que han sido impulsadas o nombradas por mujeres que fueron víctimas de tipos y modalidades de violencia que no se encuentran correctamente tipificadas, o que no existen mecanismos correctos de garantía.

¹⁷⁷ Centro de Análisis e Investigación, Op. Cit. p. 13

También se observa que en los casos en que las leyes son aprobadas en el ámbito federal, aún queda pendiente la tarea de la homologación legislativa en las entidades federativas, y que para los casos en que las leyes se han creado en algún estado de la república, los congresos locales de otros estados, o incluso el Poder Legislativo Federal no ha hecho eco de dichos esfuerzos con la urgencia y premura que debería.

Resulta importante mencionar también, que también se observa un retroceso legislativo, específicamente en el caso de la legislación sobre la interrupción legal del embarazo, donde a pesar de la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto declarada por la SCJN en 2023 y la obligación de legislar y garantizar el derecho de las mujeres en este tema, el congreso de Aguascalientes, donde se inició la lucha por dicho derecho, buscó y aprobó una reforma que reduce el periodo en el que se puede realizar el aborto voluntario, pasando de las 12 a solo 6 semanas de gestación, y estableciendo seis meses de cárcel y sanciones económicas a quien aborte después de la sexta semana¹⁷⁸, lo que significa un retroceso sin precedentes.

Finalmente, se observa que la asignación de recursos públicos no responde a un análisis real de las problemáticas que viven las mujeres mexicanas y a su urgente atención, y que además existe un debilitamiento presupuestario persistente a través de los años, de las instituciones y programas en la materia.

Se destaca que dentro del Anexo 13 se han etiquetado indiscriminadamente programas sin perspectiva de género, como los programas denominados prioritarios por el gobierno federal, que además tienen asignada la mayoría de los recursos totales, contrastando de forma muy pronunciada con el presupuesto orientado a la atención de la violencia.

¹⁷⁸ Efeminista, *El estado mexicano de Aguascalientes reduce a 6 semanas el límite para acceder al aborto*, Ciudad de México, 2 de septiembre de 2024, consultado el 7 de agosto de 2025 en <https://efeminista.com/estado-mexicano-de-aguascalientes-limita-aborto-seis-semanas/#:~:text=EFE/Carlos%20L%C3%B3pez-,El%20estado%20mexicano%20de%20Aguascalientes%20reduce%20a%206,l%C3%ADmite%20para%20acceder%20al%20aborto&text=El%20Congreso%20de%20Aguascalientes%2C%20estado,en%20el%20caso%20de%20Sinaloa.>

3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En este apartado se presentarán la información estadística que diversos sistemas han recopilado, con la intención de, en primer lugar, realizar una comparación entre los datos encontrados, y, en segundo lugar, y más importante, tomar dicha información como una herramienta que permite de una forma, medir la eficacia de las diversas acciones implementadas por el gobierno en la materia, que se pueda plasmar en un análisis de toda la información aquí contenida.

De tal manera que, para contar con la mayor cantidad de datos medibles y comparables dentro o cerca del periodo propuesto para este estudio, se tomaron en cuenta herramientas como las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de los años 2016 y 2021, es decir, las más recientes; el Sistema de Indicadores de Género del Instituto de las Mujeres, la información sobre violencia contra las mujeres correspondiente a la incidencia delictiva y llamadas de emergencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte en 2018 y 2024, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Índice de Paz México 2024 entre otros.

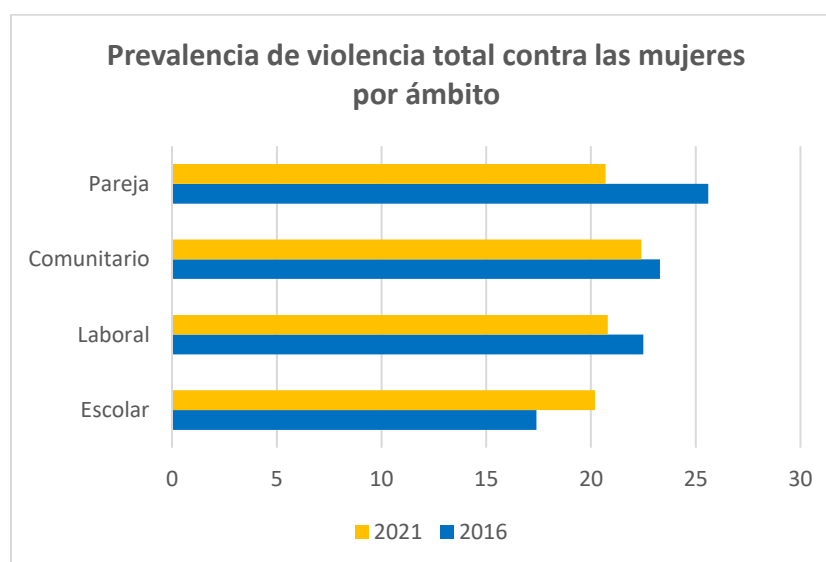
Es importante señalar que, al tratarse de un análisis basado en registros de administrativos, esta información corresponde únicamente a la de aquellas mujeres que solicitaron atención o algún servicio del Estado, como lo es atención psicológica, procuración de justicia, asistencia legal, entre otros, por lo que no es posible contabilizar a las víctimas que no hicieron, por lo que obviamente, los resultados obtenidos solo pueden reflejar un estimado de nuestra realidad.

En 2020, según datos del INEGI¹⁷⁹, las mujeres representaban el 51.2% de la población, que se contabilizó en 126,014,024 personas, y a su vez, son el 49.3% de la población infantil y adolescente. El Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, con datos de las ENDIREH realizadas periódicamente, señalan que la prevalencia de la violencia de las mujeres de 15 años y más, pasó

¹⁷⁹ Información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, consultado el 23 de septiembre de 2024 en <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

de un 66.1% en 2016, a un 70.1% para el año 2021, lo que significa que siete de cada diez mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida; de estas manifestaciones, 51.6 % de las mujeres ha sufrido violencia psicológica en 2021, comparado con el 49% de 2016, 49.7% en el caso de la violencia sexual, contrastado con el 41.3%, 34.7% para la violencia física frente al 34.0% reportado previamente, siendo el único tipo de violencia que ha disminuido, la económica, patrimonial o de discriminación, que pasó de un 29.0% a un 27.4%; ahora bien, de esta prevalencia de violencia, es muy importante destacar que el porcentaje de mujeres que sufrió algún incidente dentro de los últimos 12 meses, frente al 70.1 que lo ha sufrido a lo largo de toda su vida, es de 42.8%¹⁸⁰.

Al enfocarnos en los ámbitos en los que se presentan estas manifestaciones de violencia, se observó un aumento significativo en cuanto a los ámbitos escolar (25.3 % a 32.3%) y comunitario (38.7% a 45.6%), un crecimiento menor en el ámbito laboral (26.6% y 27.9%) y una disminución en cuanto a la violencia de pareja (43.9 a 39.9%)¹⁸¹.

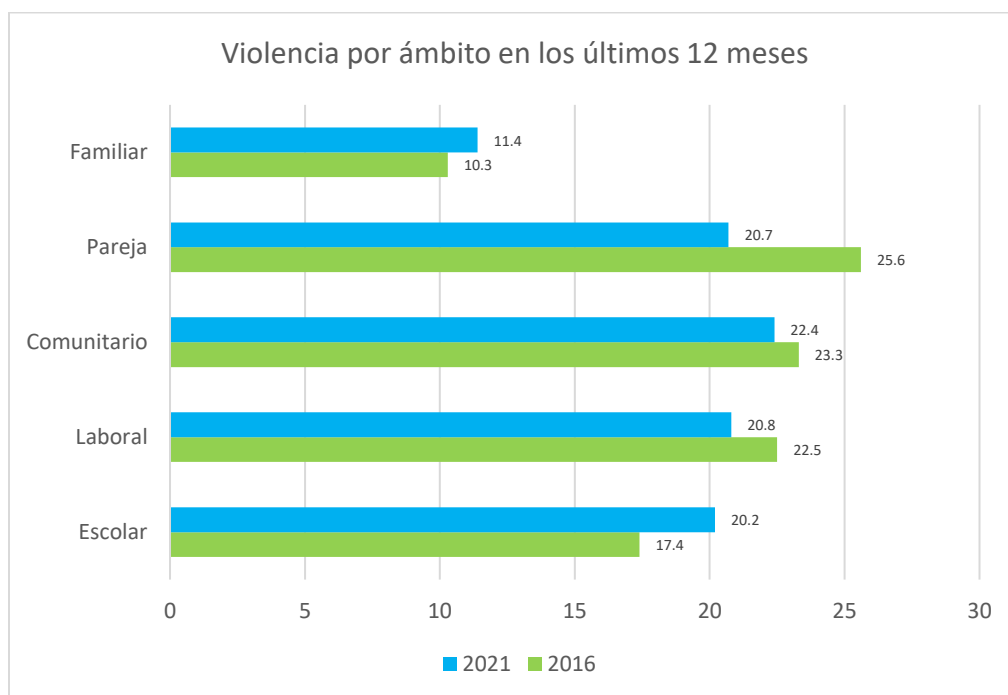


*Elaboración propia con información del ENDIREH 2021.

¹⁸⁰ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) versión ejecutiva, México, 2021, p. 25.

¹⁸¹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. Cit.

Dentro de los ámbitos considerados en esta encuesta, se observó lo siguiente:



*Elaboración propia con información del ENDIREH 2021.

Observamos entonces que, por un lado, la violencia de pareja, la comunitaria y la laboral tuvieron disminuciones en cuanto a su prevalencia, sin embargo, tanto la violencia familiar como la escolar aumentaron como manifestaciones que se presentaron de forma reciente (en los últimos 12 meses) de violencia en la vida de las mujeres mayores de 15 años.

Los datos sobre la violencia familiar coinciden con lo reportado por el SESNSP, donde se ha pasado paulatinamente de 169,579 incidentes en 2017, hasta los 284,203 de 2023, resaltando que incluso para los datos de los primeros 7 meses del año 2024 en los que existen 167,319 registros, se encuentra prácticamente con el mismo índice de la totalidad del año 2017¹⁸².

Dentro del ámbito escolar, se reportó que el lugar más común donde experimentaron violencia fue la escuela; el mayor porcentaje de personas agresoras reportadas se trata de los compañeros y maestros (hombres), así como desconocidos; finalmente,

¹⁸² Centro Nacional de Información, Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2024, p 59.

la violencia física fu el tipo de violencia menos reportada con apenas un 13.9% de los casos, frente a la violencia sexual en un 39.8% de los casos, y la violencia psicológica, con el mayor porcentaje de 46.2% del total. Además de ello, las mujeres encuestadas respondieron que en el 69.7% de los casos, no existían protocolos o medidas para la atención de casos de violencia contra las mujeres en las escuelas¹⁸³.

Avanzando a la violencia laboral, encontramos que los actos de discriminación permanecieron en el primer lugar e incluso las experiencias dentro del periodo anual superaron a las experiencias de toda la vida; la violencia sexual se reportó en segundo lugar, seguida de la psicológica, y por último la física. En este punto, me parece importante destacar que, en comparación con la encuesta de 2016, en 2021 la violencia en el ámbito laboral tuvo una disminución de solo 1.7% si se habla de los episodios de violencia en el último año, pasando de 22.5% a 20.8%, sin omitir mencionar que, en el caso de la discriminación, los reportes de los últimos doce meses representaron un aumento frente a la persistencia de violencia en toda la vida. Cuando se trata del ámbito laboral, los agresores son mayormente compañeros de trabajo, seguidos de patrones, jefes o supervisores, e incluso clientes. De forma similar al ámbito escolar, las encuestadas refirieron que en el 72.7% de los casos no tienen conocimiento de la existencia de protocolos de atención para casos de violencia contra las mujeres.

La violencia laboral tiene gran impacto en la vida y desarrollo integral de las mujeres, por lo que resulta importante ahondar en los datos arrojados por esta encuesta, la cual indica que la discriminación laboral se presenta de las siguientes formas:

- Menor oportunidad que un hombre de tener un ascenso
- Mejor pago que a un hombre por realizar el mismo trabajo
- Impedimento o limitación para realizar determinadas tareas reservadas para los hombres
- Recibir menos prestaciones que hombres con mismo nivel o puesto
- Les han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo requerido
- Limitación en su desarrollo profesional para favorecer a algún hombre

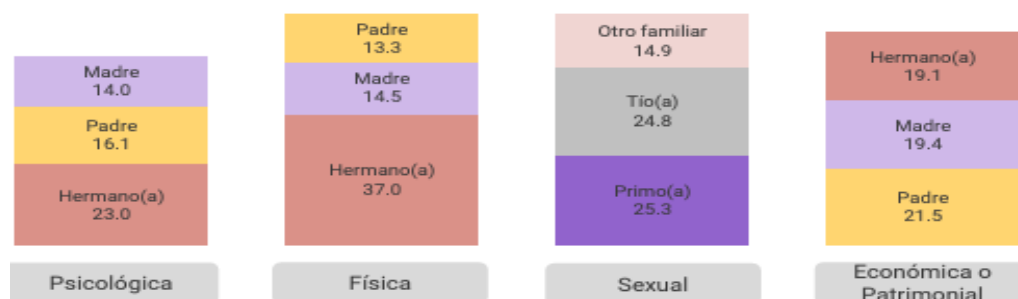
¹⁸³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Op. Cit.*, pp. 41-45.

- Petición de realizarse prueba de embarazo como requisito para trabajar
- Despido, baja de salario o no contratación por motivo de su edad, estado civil o por tener hijos pequeños
- Despido, baja de salario o no renovar contrato por embarazarse.

Casi la mitad de las personas que participaron en esta encuesta ha sufrido de violencia comunitaria (45.6%) pero aún más preocupante es que el porcentaje de ellos que ha sufrido violencia sexual en dicho ámbito es casi igual (42.2%), y además de ello, en comparación con las cifras de 2016, el porcentaje ha aumentado de 34.3% a 42.2%; en este caso, la violencia proviene en alrededor del setenta por ciento de las veces de desconocidos, y en el 64.8% sucede en la calle, seguida del transporte público con un 17.1%¹⁸⁴.

Respecto de la violencia familiar, los datos reportados arrojan que 11.4% de las encuestadas la sufrieron en los últimos doce meses – porcentaje mayor al registrado en 2016, donde se reportó el 10.3%-, en mayor frecuencia de carácter psicológico (9.2%), después la económica o patrimonial (3.1%) y la física (3.0%), y finalmente la sexual (1.7%), en dónde los agresores más comunes son hermanos(as), el padre, la madre, y tíos(as) ¹⁸⁵.

Distribución de las principales personas agresoras mencionadas por las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses por tipo de violencia

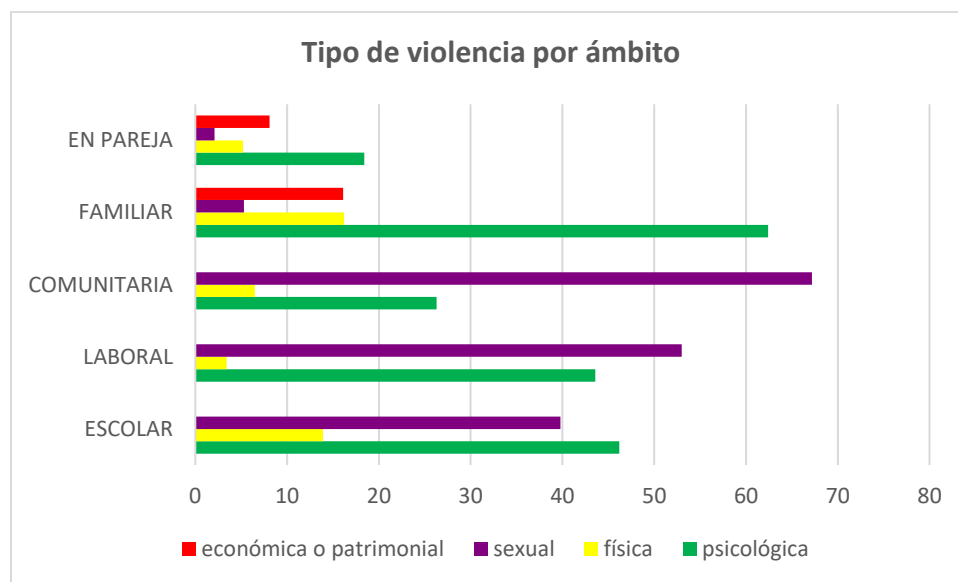


*Fuente: ENDIREH 2021.

¹⁸⁴ Instituto Nacional de Estadística y Geografía Op. Cit. P.p 47- 53.

¹⁸⁵ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. Cit. P.p 65- 68.

Finalmente, al hablar de violencia en pareja, las cifras indican que el 39.9% ha sufrido alguna manifestación a lo largo de su vida, y de ellas, 20.7% fue en los doce meses previos; de ellos al igual que en los ámbitos anteriores, el mayor porcentaje lo tuvo la violencia psicológica, seguida de la económica, la física y al último la sexual; en este último caso, se encuestó también si se tomaron acciones ante la violencia experimentada, pero en el 78.3% no solicitaron apoyo ni presentaron ninguna queja ni denuncia, el 8.3% solo presentó la queja o denuncia, el 7.4% solo solicitó apoyo, y únicamente el 4.8% tomó ambas acciones¹⁸⁶.



*Elaboración propia con información de la ENDIREH 2021.

Iniciando con la información sobre incidencia delictiva, el primer dato comparable es que en 2018 se contabilizó que del total de víctimas de algún delito (297,475), 96,696 que representan el 32.5% de ellas fueron mujeres, frente a un 54.2% de hombres,¹⁸⁷ pero para agosto de 2024, contando con que el año no ha concluido,

¹⁸⁶ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Op. Cit.* P.p 77- 82

¹⁸⁷ Centro Nacional de Información, Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2018, p. 11

hay un total de 255,489 víctimas, pero el porcentaje de mujeres dentro de dichas víctimas aumentó al 32.9% traducido a 83,932, frente a un 55.9% de hombres¹⁸⁸.

Según la Información sobre violencia contra las mujeres del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de feminicidio, conforme a su tipificación en las entidades federativas - lográndose en las 32 entidades federativas en octubre de 2017- representó un 0.04% en la incidencia delictiva total del periodo de enero a diciembre de 2018, contabilizándose 834 presuntos delitos de feminicidio en el año; los estados con mayor incidencia fueron el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa, siendo Baja California Sur la única entidad que no presentó ningún incidente de este tipo.

En este caso también resalta que los municipios con mayor índice delictivo de feminicidios son Juárez Chihuahua, Culiacán Sinaloa, Monterrey Nuevo León, Ecatepec Estado de México, y Chihuahua Chihuahua, la mayoría de los cuales presentan incidencia delictiva elevada generalizada, y especialmente en el caso de Juárez, es una problemática que persiste desde hace más de veinte años¹⁸⁹.

La información de 2024 registra 463 feminicidios hasta el 31 de julio, lo que no muestra variación significativa alguna con 2018, aunque hay que señalar que, en los años de 2019, 2020 y 2021 se observó una tendencia al alza, pasando de los 899 de 2018 al pico más alto en 2021 con 981, tendencia que aparenta estar revirtiéndose con la disminución a 961 en 2022, y 832 en 2023. Al revisar lo correspondiente a los municipios con los registros más altos, persisten Juárez y Chihuahua en Chihuahua, así como Monterrey Nuevo León, pero encontramos ahora a Tijuana Baja California, y a Iztapalapa en Ciudad de México en el que el último de los casos se podría explicar por su densidad poblacional, sin que la problemática en el norte del país nos muestre un avance en la materia¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Centro Nacional de Información, Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2024, p. 6

¹⁸⁹ Centro Nacional de Información Op. Cit. P. 15 y 23

¹⁹⁰ Centro Nacional de Información Op. Cit. P. 10 y 17

En resumen, en el caso de los feminicidios, la tendencia en aumento que se observó en la primera mitad del sexenio, se revirtió, terminando el año de 2023 con tendencias a disminuir los promedios de mujeres en general, y también en el caso de niñas y adolescentes.

Si confrontamos los datos de 2018 y 2024 sobre el total de llamadas recibidas al 9-1-1, de las relacionadas con violencia contra la mujer se reportaron:

Tipo de incidencia	2018	2024
Violencia familiar	4.01	3.86
Violencia de pareja	1.83	1.8
Violencia contra la mujer	1.07	2.19
Acoso u hostigamiento sexual	0.04	0.09
Abuso sexual	0.03	0.05
Violación	0.02	0.02

*Elaboración propia con datos del SESNSP

De la información anterior se observa que el único delito donde se ha observado una disminución respecto de los reportes, es en casos de violencia familiar, observamos también que los porcentajes de reportes de violencia de pareja y violaciones se han mantenido constantes, pero en los casos de delitos de violencia de género, acoso y abuso sexual, la tendencia demuestra un incremento en los reportes.

En 2022, el país tuvo la cifra más elevada en cuanto a la cantidad de llamadas de emergencia referentes o relacionadas con incidentes de violencia sexual, con 6,977 llamadas, lo que significó a un aumento del 13.1 % desde 2021 y es casi el doble del número en 2017¹⁹¹.

¹⁹¹ Instituto de la Economía y la Paz, *El aumento en la violencia de género*, Instituto de la Economía y la Paz, México, 2024, consultado el 20 de noviembre de 2024 en <https://www.indicedepazmexico.org/el-aumento-en-la-violencia-de-gnero>

Lo anterior puede tener varios significados, primero que las cifras reales han aumentado, plasmándose en las llamadas de emergencia, segundo, que cada vez más personas están incentivadas para realizar los reportes, o tercero, que se ha implementado algún tipo de mejora que impacta en los registros de llamadas; sin embargo, también se debe mencionar que ya desde 2018 se había realizado n ajuste y mejoramientos por las entidades federativas para fortalecer el sistema de acopio de datos, por lo que la última posibilidad no tendría un impacto en el comparativo de estos periodos. De cualquier forma, con la información real que se presenta, se puede observar que al menos en cuanto a estos casos, no se puede considerar que existan avances en este ámbito.

Otro delito importante es el del homicidio; en el caso del homicidio doloso, la cifra reportada en el año de 2018 fue de 2,746 mujeres víctimas a nivel nacional, continuando la tendencia al alta de años anteriores, y siendo los estados con incidencia más elevada los de Guanajuato, México, Baja California, Guerrero y Jalisco; por otro lado, en el caso del homicidio culposo se señalaron 3,192 mujeres víctimas, repitiendo como la entidad con la cifra más alta Guanajuato, seguido por Nuevo León, Puebla, Michoacán y Veracruz¹⁹².

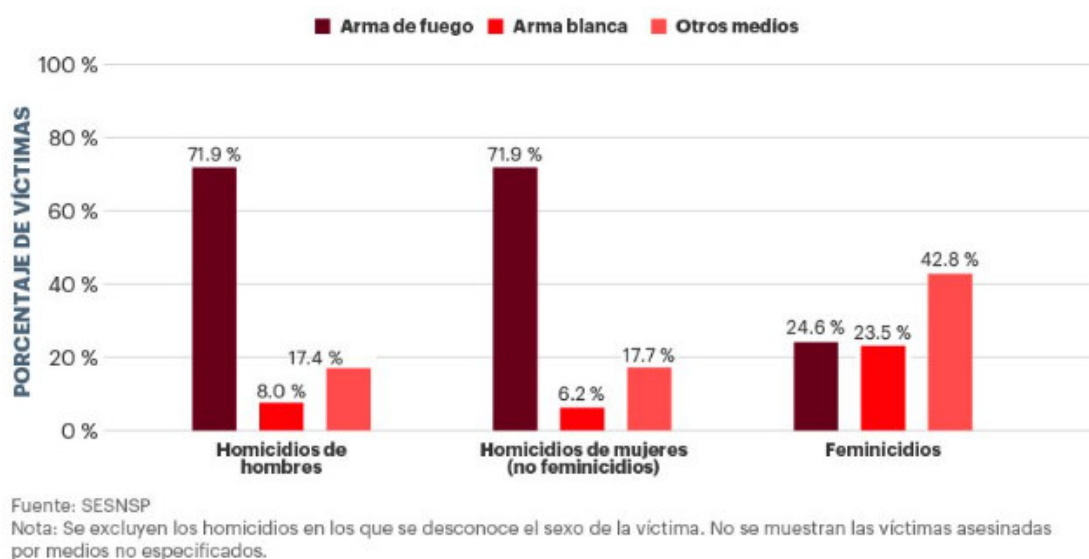
Las cifras correspondientes a los meses de enero a julio de 2024 registran 1566 homicidios dolosos a víctimas mujeres, lo que al hacer un comparativo mensual, muestran una ligera disminución respecto de 2018, pero un aumento si la comparación mensual se hace con el año de 2023, el año anterior y al mismo tiempo el año con el registro más bajo respecto de este delito. Las entidades que encabezan los reportes de homicidio doloso son Guanajuato, Baja California, Estado de México y Guerrero¹⁹³.

Vale la pena enfatizar que existen diferencias entre los homicidios de mujeres y los feminicidios, no solo en las causas y motivos, sino también en la forma, pues como lo muestra en siguiente gráfico referente a datos del año 2022, si bien los homicidios de hombres y los homicidios de mujeres (no feminicidios) muestran patrones casi

¹⁹² Centro Nacional de Información ... Op. Cit. P.28

¹⁹³ Centro Nacional de Información Op. Cit. P. 21-22

idénticos, con siete de cada 10 muertes por un arma de fuego, los feminicidios se llevan a cabo en su mayoría sin armas de fuego, llevándose a cabo ya sea con armas blancas, o por “otros medios” los cuales pueden referirse a golpes, estrangulamientos entre otros, aunque los registros oficiales no proporcionan dicha información completa sobre dichos medios¹⁹⁴.



Finalmente, dentro de los delitos que atentan contra la integridad física, los datos sobre mujeres presuntas víctimas de lesiones dolosas se reportó un registro de 61,957 incidentes, una disminución del 7.4% respecto de los 66,724 reportes del año 2017; en 2019 se observó un repunte con 66,345 registros, en 2020 nuevamente existió un decremento con 57,495 casos, pero en los años subsecuentes la tendencia fue al alza con registros de 62,370 en 2021, 67,318 en 2022 y 69,008 en 2023, por lo que aquí tampoco se observa un avance; en el análisis por entidad federativa, se observan que los primeros tres lugares corresponden a las entidades mayormente pobladas, es decir, el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, seguidos por Baja California y Morelos¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Instituto de la Economía y la Paz *Op. Cit.*

¹⁹⁵ Centro Nacional de Información ... *Op. Cit.* P.28

Ahora bien, en casos de delitos que atentan contra la libertad, y específicamente en los casos de secuestro, en primera instancia parecía que había avances, pues se detecta una disminución de los incidentes desde 2020, en donde se reportaron solo 224 casos, frente a los 412 registrados en 2019, tendencia que continuó en 2021 con 192 casos y en 2022 con 161, sin embargo, para 2023 volvió a elevarse la cifra a 241, y para 2024 con los 130 casos registrados, la cifra no parece que vaya a mantenerse por debajo del año 2022¹⁹⁶.

Conforme la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, las mujeres fueron las más afectadas respecto de los delitos de índole sexual, con una incidencia de 4290 delitos por cada 100 mil mujeres, cifra superior a la del año 2022, donde la estimación fue de 3740 delitos. Para poder dimensionar la diferencia en este tipo de delitos entre hombres y mujeres, esta Encuesta contabilizó 9 delitos contra mujeres por cada delito sexual perpetrado contra un hombre¹⁹⁷.

Específicamente en cuanto al delito de violación, la tendencia observada a partir de 2018 se observa en aumento, partiendo de 15,322 reportes en 2018, 17, 342 en 2019, 16, 543 para 2020, 21,189 incidentes en 2021, 23,101 para el año 2022 y 22,731 el año pasado, presentando una cifra parcial de 12,669 para el presente año, pero reportando cifras superiores dentro de los meses transcurridos, a los de los mismos meses de años anteriores¹⁹⁸.

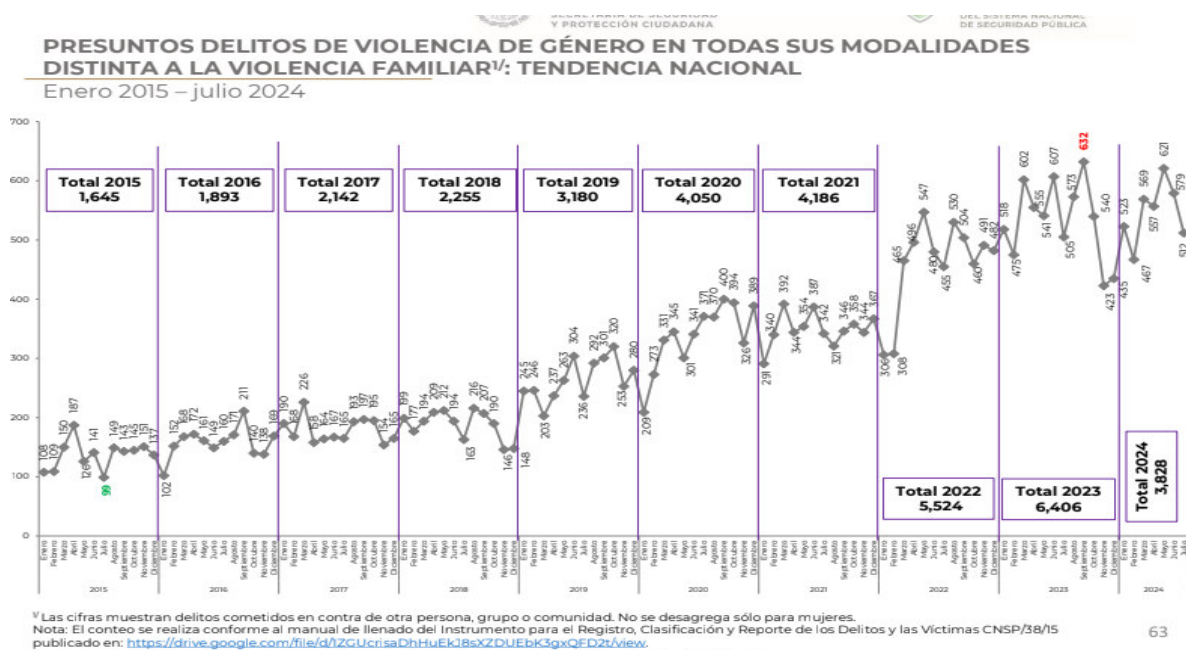
Todo lo anteriormente desarrollado se podría sintetizar con los gráficos que el SESNSP elaboró referentes a la violencia familiar, de las demás manifestaciones de violencia de género, así como del número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, dentro de las cuales se refleja una clara tendencia al incremento de esta problemática, y que en el mejor de los casos, se podría hablar de que las cifras de los dos últimos años podrían

¹⁹⁶ Centro Nacional de Información ... Op. Cit. P. 37

¹⁹⁷ INEGI, *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024*, México, 2024, p.2

¹⁹⁸ Centro Nacional de Información ... Op. Cit. p. 68

significar una estabilización, pero en ninguno de los caso se observa tendencia al decremento en incidencia delictiva referente a delitos contra las mujeres.



*Fuente: SESNSP

Para finalizar este capítulo en el que se presentaron distintos índices, encuestas y fuentes de información gubernamental, así como no gubernamental que mantienen registros sobre delitos y manifestaciones de violencia contra la mujer, como una especie de conclusión anticipada, se observa que, si bien esta problemática no se originó con el inicio del sexenio analizado, y en varios de los delitos en específico el aumento de las cifras pudiera responder a una inercia presente, no se observa ningún cambio en sentido positivo, avance o logro en el combate o desincentivación para la comisión de delitos contra las mujeres o actos de violencia, sin siquiera tocar el tema de las instancias posteriores a los reportes o llamadas de emergencia, como lo sería la presentación de denuncias, sentencias condenatorias, efectividad de las medidas de protección como medidas cautelares, etc.

CONCLUSIONES

Como se señaló en la introducción, esta investigación se planteó con el objetivo de realizar un análisis sobre los esfuerzos reales, legales y políticos del gobierno mexicano a escala federal, en el combate a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, especialmente del derecho a una vida libre de violencia, y determinar si dichos esfuerzos han tenido un impacto positivo y real en el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

Del análisis conceptual e histórico realizado en el primer capítulo se infiere la existencia, reconocimiento y exigencia de los derechos de las mujeres, en primer lugar, debido a la necesidad de nombrarlos y plasmarlos en los instrumentos jurídicos existentes, ya que son evidentes las diferencias tanto físicas, como sociales y culturales por la simple condición de ser mujer, a pesar de que la norma fundante reconozca en su artículo primero la igualdad jurídica; en segundo término, la tendencia en el derecho y la sociedad internacionales por la búsqueda de la igualdad y de la eliminación de todas las formas de discriminación, así como el empoderamiento y adelanto de la mujer, exige a los Estados tomar medidas y ejecutar todo tipo de acciones para su logro; finalmente, porque en el contexto socio-cultural de nuestro país, subsiste hasta la actualidad un sistema machista hetero patriarcal que perpetúa actos discriminatorios que ponen en peligro la vida de las mujeres, lo que hace imperativo redoblar los esfuerzos para lograr la protección y garantía de los derechos de la población del sexo femenino.

En este mismo capítulo se plasmó y resaltó que la labor del Estado mexicano en la garantía de los derechos de las mujeres desde sus inicios, y a lo largo de la historia moderna, ha sido impulsada y reclamada por las exigencias de los grupos feministas y la sociedad civil, cuyos logros a lo largo de los años abarcan el voto femenino, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, y en años recientes, el reconocimiento, garantía y protección contra las diversas formas de violencia contra la mujer; reconocimiento que no se tradujo a una legislación nacional en la materia sino hasta el año de 2007.

Con el segundo capítulo También se hace visible que los avances en el ámbito de las entidades federativas ha encontrado trabas que responden a las singularidades y cosmovisiones regionales del país reflejadas en las fuerzas políticas locales, por lo que a la fecha no existe homogeneidad en el nivel de protección que otorgan leyes, programas y asignaciones presupuestales a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo la Ciudad de México la entidad donde existen mayores programas y mecanismos protectores en favor de las mujeres, lo que significa que, en el mejor de los casos, mujeres que habitan en otras entidades se desplazan al centro del país para acceder a dichos mecanismos, siempre y cuando se cuente con el conocimiento de la existencia de dichos programas y mecanismos, así como los recursos para movilizarse, pero en el caso en que se encuentra la mayoría de las mujeres, significa que no poseen información ni posibilidad de acceder a ellos.

La misma afirmación puede hacerse para el caso de las obligaciones internacionales del gobierno mexicano, pues fuera de la primera Conferencia Internacional de la Mujer, que se celebró en nuestro país en 1975, el Estado mexicano, hasta la fecha de esta investigación, no ha tenido una agenda o visión proactiva, pues no se observó en ningún caso algún nivel gubernamental mexicano haya propuesto, impulsado o presidido mecanismos o estándares internacionales referentes a igualdad de género, derechos de las mujeres erradicación de la violencia contra la mujer, lo que si se observa en materias con enfoques como la economía o el medio ambiente.

Incluso más preocupante es que a pesar de que conforme la CEDAW, nuestro Estado está obligado a trabajar en combatir y eliminar los patrones sociales y culturales basados en la inferioridad de alguno de los sexos, sin embargo, desde la ratificación de la Convención en 1981, nuestro gobierno ha sido condenado por instancias internacionales en varias ocasiones y ha sido declarado responsable de violaciones de derechos humanos de las mujeres, y solo tras las sentencias emitidas es que se han tomado acciones, reafirmando una vez más la actitud pasiva del Estado mexicano en el abordaje de la violencia contra la mujer y los derechos de las mujeres en general.

Como se señaló, a partir del segundo capítulo pudimos analizar la existencia de diversos estándares internacionales en la materia que nuestro país ha firmado y ratificado, partiendo desde las que se han realizado en el marco de las Naciones Unidas, como la Convención por excelencia en la materia, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Comité son usados en instancias internacionales, pero también en litigios de jurisdicción interna, pues sus recomendaciones y definiciones han sido respaldados por la comunidad internacional por más de 25 años, constituyéndose así como Principios de Derecho Internacional Consuetudinario, casi similar en el contexto regional lo es la Convención Belém do Pará, que también forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad y convencionalidad y que es especialmente importante para la investigación pues en ella reside la obligación internacional del Estado mexicano de la adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer, tema central de esta investigación.

Aunado a ello, este capítulo también demuestra una tendencia del Estado mexicano a continuar violando los derechos de las mujeres, pues a pesar de los compromisos adquiridos desde 1975 y de la firma de estas convenciones en el siglo pasado, todavía al inicio del sexenio analizado, persistieron sentencias emitidas por Cortes internacionales por las ha sido declarado responsable debido a las violaciones de derechos de las mujeres a manos de diversas autoridades tanto federales como locales, lo que permite afirmar que la obligación del respeto la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y los mecanismos para capacitar a las autoridades en la materia, con perspectiva de género han sido insuficientes o inadecuados.

A partir del último capítulo avocado exclusivamente a los esfuerzos dentro del periodo de 2018 a 2024, se demuestra que la mayoría de las leyes aprobadas en el periodo partieron de iniciativas de mujeres víctimas de violencia o en “honor” a víctimas de actos de violencia feminicida, y con la presión de la sociedad civil que ha hecho cada vez más visible la negligencia legislativa y de acción del gobierno; asimismo se observa que, contrario a otros procesos que los gobiernos federales

de varios sexenios, en los que han considerado diversos temas como prioritarios y urgentes, la homologación y armonización de leyes locales con las leyes federales, no ha caminado con la suficiente celeridad, a pesar de existir obligaciones o mandatos al respecto, que también existen iniciativas de ley que siguen sin discutirse ni aprobarse; ejemplos de estas afirmaciones son: el caso de la Ley Olimpia en el que existen todavía entidades que no han cumplido con el mandato de realizar las adecuaciones legislativas en la jurisdicción local a pesar de que el plazo de 180 días ya transcurrió; refiriéndonos a la Ley Malena, que se propuso y aprobó primero en el estado de Puebla, y después en la Ciudad de México, se mencionó que existe la iniciativa a nivel federal, que se presentó desde 2023 en el Senado, pero como se mencionó, no se le ha dado prioridad para ser discutida y aprobada finalmente sobre la legislación sobre el aborto en Aguascalientes, con la disminución en las semanas en que es legal el aborto voluntario pasando de 12 a 6, hay un claro retroceso en la garantía de derechos.

Respecto del presupuesto federal asignado al Anexo 13, se concluye que aunque el objetivo en el momento de su creación era la integración de la perspectiva de género y la asignación de presupuesto para garantizar las políticas públicas encaminadas a lograr la Igualdad, para el gobierno en turno esto fue solo en cuanto al etiquetado de los recursos del anexo mencionado, pues en realidad, la mayoría de los recursos se utilizaron en los subapartados del mismo se refieren a los programas prioritarios del gobierno o programas del bienestar que se encuentran etiquetados en este anexo sin justificación visible; aun en el caso de los recursos que si fueron asignados para la Erradicación de la Violencia de Género correspondiente apenas al 7.2% del total del Anexo Transversal 13, todavía existieron desviaciones y disminuciones en lo que efectivamente se les otorgó, como los casos de la CONAVIM y el INMUJERES, a pesar de que la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que no se pueden reducir los recursos asignados a estos objetivos salvo casos específicos, es decir, que con todo lo anteriormente señalado, el cumplimiento del gobierno en materia presupuestaria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, resulta en una simulación y demuestra que esta problemática

ha sufrido el mismo destino que muchas otras que han sido dejadas sin presupuesto suficiente, en favor de los proyectos y programas prioritarios del gobierno federal, que ha acaparado el presupuesto en todo el sexenio.

Finalmente, el estudio estadístico realizado en el tercer capítulo fue la herramienta metodológica elegida para obtener conclusiones no solo cualitativas sino también cuantitativas y observar el reflejo de la implementación de las leyes y políticas en la materia, dentro de las cuales se determinó lo siguiente: para mitad del sexenio, la prevalencia de violencia no solo no se detuvo, sino que continuó en ascenso. Los datos del SESNSP ejemplifican estas afirmaciones, pues en el caso específico de la violencia familiar, la cifra reportada para todo el año 2017- en el periodo previo al elegido para el análisis- coincide casi exactamente con la cifra reportada en tan solo siete meses del año 2024, lo que nos permite confirmar que, al menos en cuanto a la violencia familiar, no existió avance alguno, y aún más, que las preocupaciones expresadas en algún momento de que la pandemia por el COVID y el quedarse en casa por periodos prolongados de tiempo si significó que las mujeres estuvieron en mayor riesgo de ser violentadas en el núcleo familiar.

La discriminación dentro del ámbito laboral sigue siendo la mayor manifestación de violencia contra las mujeres, por lo que podemos concluir que tampoco se ha atacado desde la raíz el problema, ni existe un cambio en la cultura machista de nuestro país. Con el estudio también se observa que tampoco existe confianza en las autoridades, pues el porcentaje de denuncias o quejas presentadas por actos de violencia contra mujeres sigue siendo mínimo.

Del estudio de incidencia delictiva por entidades federativas concluimos que, desde el caso Campo Algodonero hasta la actualidad, el norte de país sigue siendo el epicentro del problema de los feminicidios, aunque la Ciudad de México ya presenta números similares, por lo no hay avances palpables en la comparación del inicio con el fin del sexenio, ni tampoco en la contención regional de los feminicidios.

Finalmente, como se mencionó con antelación, si bien el contexto histórico y social, así como el marco legal demuestran que el problema planteado como centro de esta investigación no se originó en el sexenio 2018- 2024, sino que se trata de un

problema estructural, y representa una preocupación internacional, también es cierto que los cambios y avances en materia legislativa y del marco legal mexicano, que en su mayoría no fueron impulsados por el gobierno federal, así como los datos aquí retomados, permiten afirmar y confirmar que dentro de la agenda gubernamental, la protección y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no fue un tema prioritario para el gobierno obradorista, y que por lo tanto su omisión en la materia se tradujo en que no existen avances en la materia, tendencia que, dado que el nuevo gobierno afirma ser una continuación del anterior y que tiene los mismos objetivos, puede permanecer o agravarse, pues a la fecha, se observan cambios preocupantes en las instituciones encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia, como el INMUJERES y la CONAVIM.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Cfr. Bernal Gómez, B., *“La mujer y el cambio constitucional en México. El Decreto de 31 de diciembre de 1974”*, en Carpizo, Jorge y Madrazo, Jorge (coords.), Memoria del III Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1984, p. 297.

Bonifaz Alonso L., *La evolución de los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2017, p.p. 11.

Cano, G., *“Más de Un Siglo de Feminismo En México”*. Debate Feminista, México, vol. 14, 1996, pp. 345–60.

Eli Bartra, *“El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia”*, La Ventana, revista de estudios de género, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, núm. 10, p. 218, diciembre de 1999.

Fix-Zamudio, H., Carrillo Flores, Antonio, *La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos*. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, 1983, número 8, p. 196-198.

Galeana, P. presentadora, *Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, pp. 245- 248.

Hernández Moreno M., *La nueva Escuela Mexicana y su Impacto en la Sociedad*, Secretaría de Educación Pública, México, p. 4-16

Lagarde, M. (1997), *Género y Feminismo. Desarrollo Humano y democracia*, 2a. ed., Madrid, Grafistaff. p.p 50-52.

Lechuga Montenegro J., Ramírez Argumosa G. y Guerrero Tostado M., *Educación y Género. El largo trayecto de la mujer hacia la modernidad en México*, Facultad de Economía UNAM, vol. 15, núm. 43, 2018, p.p 110- 139

Pérez Luño A. E. *El concepto de los Derechos Humanos y su problemática actual*, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, p.179

Peris M., *Juez Estado y Derechos Humanos*, España, Editorial Fernando Torres, 1976, p. 135.

Rodríguez Bravo R., *Los derechos de las mujeres en México, Breve recorrido en Cita Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, p.p. 280-281.

Rodríguez y Rodríguez J., *Diccionario Jurídico Mexicano*, 2º Edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, 2004, p. 1268.

Rocha Islas, M. E., *Feminismos en Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015, p. 216.

Rojo, L. Comp., *Sumarios de Jurisprudencia / Violencia de Género*, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 2da Edición, 2011, p.p. 22

Ruiz Carbonell R., *La Evolución Histórica de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 76

Solís García, B. (2006). *Evolución De Los Derechos Humanos*, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p.p. 77-78.

Truyol y Serra, A., *Los Derechos Humanos*, Madrid, Editorial Tecnos, 1979, p. 6.

Valles Ruiz, R. M., *Primer Congreso Feminista de México, Historia de las mujeres en México*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2015 p. 245.

Varela N., *Feminismo para Principiantes*, Barcelona, Ediciones B.S.A., 2008, p. 9

FUENTES JURÍDICAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Organización de Estados Americanos, 1994, consultado el 20 de febrero de 2024 en <https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp>

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas, 1995 y reimpresso por ONU Mujeres en 2014, p. 9.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, México, 2007.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ciudad de México, 2008

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2003

Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 2006

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 Para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, México, 2009

Programa Integral para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021- 2024.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Naciones Unidas, octubre de 1999, artículos 1 y 2.

Recomendación general núm. 35 sobre violencia por razón de género contra la mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 26 de julio 2017

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2008.

FUENTES JURISPRUDENCIALES

Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 31 de agosto de 2010, consultado el 5 de marzo de 2024 en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf

Varios 9/2005-PS, solicitud de modificación a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/94, derivada de la contradicción de tesis 5/92, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, sentencia de 16 de noviembre de 2005. Consultable en: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, enero de 2006, página 659

Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Ministro Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz, sentencia de 28 de agosto de 2008, consultado el 30 de enero de 2024 en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=91638>.

Corte IDH. Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.

Sentencia sobre el amparo directo 9/2021 sobre convenios de divorcio, registro digital 2023934, Tesis 1ª/J.57/2021 (11ª), Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 29 de septiembre de 2021, consultada el 15 de mayo de 2024 en <https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/0IFLpn0BNHmckC8Laath/%22Derecho%22>

Sentencia sobre el amparo directo 123/2021 sobre renuncia anticipada de gananciales de la sociedad conyugal, registro digital 2028496, tesis aislada IV. 1º. C. 6. C. (11ª), Tribunales colegiados de Circuito, Ponente: Helmuth Gerd Putz Botello, 10 de febrero de 2023 consultado el 15 de mayo de 2024 en <https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/aLZu4o4BXVRzDR5ETI6u/%22Ilegalidad%22>

Sentencia sobre el amparo directo en revisión 5465/2014 sobre derecho de las mujeres, derechos indígenas y derechos de la niñez, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 26 de abril de 2017, consultado el 15 de mayo de 2024 en https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/hTDv3XgB_UqKst8o84Rf/%22Interpretaci%C3%B3n%20cultural

Sentencia sobre el Incidente de suspensión en revisión 111/2021 sobre medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, registro digital 2023785, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Ponente: Ricardo Paredes Calderón, 12 de noviembre de 2021, consultada el 16 de mayo de 2024 en <https://egaceta.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023785>

Sentencia sobre la Queja 193/2017 sobre la en interés legítimo para solicitar la alerta de violencia de género, registro digital 2015417, Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Ponente: Jaime Allier Campuzano, 27 de octubre de 2017, consultada el 13 de enero de 2025 en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015417>

FUENTES INSTITUCIONALES

Alcalde Luján L.M., *Presentación del Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo*, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, marzo 2020, p. 5.

Centro Nacional de Información, Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2018, p.6- 11

Centro Nacional de Información, Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2024, p 59.

CONAHCYT, *Prevención, atención y erradicación de la Violencia de Género*, segunda edición del Seminario Permanente, sesión 5 “a 8 años de las alertas de violencia de género: un balance de resultados y desafíos, CONAHCYT, México, emitido el 30 de enero de 2024, y consultado el 5 de marzo de 2024 en <https://www.youtube.com/watch?v=ww7zgJhc1sE>

Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Antecedentes del PAMIMH*, consultado el 4 de marzo de 2024 en <https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Conocenos/Antecedentes>

Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Marco Normativo del PAMIMH*, consultado el 4 de marzo de 2024 en [https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Normatividad/Igualdad Mujeres Hombres](https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Normatividad/Igualdad_Mujeres_Hombres)

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, *¿Qué es la violencia contra las mujeres y sus modalidades?*, 2016, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-contra-las-mujeres-y-sus-modalidades>

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, *¿Qué hacemos?*, consultado el 05 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos>

Diario Oficial del a Federación, Secretaría de Gobernación, 29 de mayo de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690265&fecha=29/05/2023#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 29 de noviembre de 1017, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2018/PEF_2018_orig_29nov17.pdf

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de febrero de 2024, Poder Ejecutivo, p. 4, consultada el 8 de marzo de 2024 en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b9501d1361289d53faf96fa9814ff422.pdf

Gobierno de la Ciudad de México, *Manual de Contenidos Laboratorio de Análisis Multidisciplinario “Sobre Ley Olimpia”*, Ciudad de México, p. 3, consultado el 7 de marzo de 2024 en [https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ViolenciaDigital/Manual_Contenidos Lab Ley Olimpia.pdf](https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ViolenciaDigital/Manual_Contenidos_Lab_Ley_Olimpia.pdf)

Instituto Chihuahuense de las Mujeres, *Tipos y Modalidades de Violencia contra la Mujer*, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/tipos-y-modalidades-de-violencia-contra-las-mujeres/>

Información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, consultado el 23 de septiembre de 2024 en <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, *Violencia contra las mujeres en México*, consultado el 30 de enero de 2024 en <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) versión ejecutiva, México, 2021, p. 25.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 30 de agosto de 2022, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, México, 2024, p.2

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, "Hace 14 años se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2017, consultado el 21 de febrero de 2024 en <https://www.gob.mx/inafed/articulos/hace-14-anos-se-promulgo-la-ley-federal-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion#:~:text=El%20origen%20de%20esta%20ley,como%20un%20anteproyecto%20de%20ley.>

Instituto Nacional de las Mujeres, *Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres*, México, 24 de octubre de 2021, consultado el 5 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>

Instituto Nacional de las Mujeres, *Compilación legislativa para garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia*, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2008, p. 11.

Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, 2021.

Ley Ingrid, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consultada el 8 de marzo de 2024, en https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/comunicacion/infografias/Ley_ingrid_.pdf

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, miércoles 8 de marzo de 2023, Tomo DLXXV Número 6, Segunda Sección, Gobierno del Estado,

Poder Legislativo, consultado el 8 de marzo de 2024, en https://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_2_08032023_C.pdf

Procuraduría Federal del Consumidor, La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia digital, 26 de abril de 2021, México, consultado el 07 de marzo de 2024 en <https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~:text=Es%20un%20conjunto%20de%20reformas,digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolencia.>

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo, México, 2020.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN, México, 2020.

CEDAW, Recomendación General no. 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer referente a medidas especiales de carácter temporal, 2004, consultado el 24 de enero de 2024 en [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20\(Spanish\).pdf](https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf)

CEDAW, *Recomendación General 28*, 2010, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendacion-general-28>

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observancia General N°16, 2005.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, artículo 1, de la resolución A/RES/48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993.

ONU Mujeres, Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, consultado el 01 de noviembre de 2023 en <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>

ONU Mujeres, Acerca de ONU Mujeres consultado el 21 de febrero 2024 en <https://www.unwomen.org/es/about-un-women>

Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), Conceptos importantes concernientes al Género, p. 1 consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf>

Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI) Conceptos y *Definiciones*, ONU Mujeres, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Los Derechos Humanos de las Mujeres y el Enfoque de Género, 2022, p. 1

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, New York, 1979, consultado el 19 de febrero de 2024 en <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

UNESCO, Educación y Género, 2019, consultado el 24 de enero de 2024 en https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_y_genero_20190525.pdf

United Nations, Los derechos de la mujer son derechos humanos, Publicación de las Naciones Unidas, Ginebra, 2015, p.1 en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf

UNICEF América Latina y el Caribe, Igualdad de Género, consultado el 24 de enero de 2024 en <https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero>

UNICEF, Comunicación, Infancia y Adolescencia Guía para periodistas, Argentina, 2007, p. 13.

Unión Europea, Informe “La Interseccionalidad de la discriminación por razones de raza, etnia y género”, Madrid, 2022, p. 16 consultado el 24 de enero de 2024 en https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/I_Interseccionalidad_E_S.pdf

PAGINAS WEB

Amnistía internacional, *¿Cómo se violan los derechos de las mujeres?*, Derechos de las Mujeres, en <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/womens-rights/#:~:text=%C2%A1Los%20derechos%20de%20las%20mujeres%20son%20derechos%20humanos!&text=Entre%20ellos%20est%C3%A1n%20los%20relativos,salario%20por%20el%20mismo%20trabajo>.

Congreso de la Ciudad de México, *Comisión de Congreso CDMX reconoce violencia vicaria en ley*, Ciudad de México, 2023, consultado el 23 de julio de 2024 en

<https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-comision-congreso-cdmx-reconoce-violencia-vicaria-ley-3935-1.html>

Efeminista, El estado mexicano de Aguascalientes reduce a 6 semanas el límite para acceder al aborto, Ciudad de México, 2 de septiembre de 2024, consultado el 7 de agosto de 2025 en <https://efeminista.com/estado-mexicano-de-aguascalientes-limita-aborto-seis-semanas/#:~:text=EFE/Carlos%20L%C3%B3pez-.El%20estado%20mexicano%20de%20Aguascalientes%20reduce%20a%206,1%C3%ADmite%20para%20acceder%20al%20aborto&text=El%20Congreso%20de%20Aguascalientes%2C%20estado,en%20el%20caso%20de%20Sinaloa>.

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), *Salud Reproductiva*, consultado el 19 de mayo 2024 en <https://gire.org.mx/salud-reproductiva/>

Grupo de Información en Reproducción Elegida, *Entidades que Penalizan la Violencia Obstétrica*, México, 2018, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://gire.org.mx/plataforma/entidades-que-penalizan-la-violencia-obstetrica/>

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “Entidades que penalizan la Violencia Obstétrica”, Limón, 2018, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://gire.org.mx/plataforma/entidades-que-penalizan-la-violencia-obstetrica/>.

Hernández Mora C. y Cravioto Romero C.S., *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, adiciona una fracción VII al artículo 6 y reforma los incisos a) y b) de la fracción XII del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; adiciona un Capítulo I Bis Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, que comprende los artículos 301 Bis, 301 Ter y 301 Quáter al Código penal Federal y modifica el artículo 36 y recorres los actuales 36 y 37 de la Ley General de Víctimas en materia de violencia ácida, denominada “Ley Malena”, 24 de mayo de 2023, consultada el 8 de marzo de 2024 en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-05-24-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Citlalli_Hdez_Sen_Cravioto_Ley_MALENA.pdf*

Instituto de la Economía y la Paz, *El aumento en la violencia de género*, Instituto de la Economía y la Paz, México, 2024, consultado el 20 de noviembre de 2024 en <https://www.indicedepazmexico.org/el-aumento-en-la-violencia-de-gnero>

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “*Hace 14 años se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*”, México, 2017, consultado el 21 de febrero de 2024 en <https://www.gob.mx/inafed/articulos/hace-14-anos-se-promulgo-la-ley-federal-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion#:~:text=El%20origen%20de%20esta%20ley,como%20un%20anteproyecto%20de%20ley>.

Lagarde M., *El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia* en https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf

Mejía, V., *Cinco datos que debes saber sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM, consultado el 03 de marzo de 2024 en <https://coordinaciongenero.unam.mx/2022/02/cinco-datos-que-debes-saber-sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/#:~:text=En%202007%2C%20feministas%20mexicanas%2C%20entre,ejercida%20en%20todas%20sus%20formas>

Mondragón Herrada C. *El Avance de los Derechos de las Mujeres*, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3101/13.pdf>

Pérez Contreras, M. de M., *Comentarios a la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres*. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, México, 2010, 43(127), Consultado el 22 de febrero de 2024 en https://doi.org/https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332010000100012

Salomón & Warner Asociación Civil, *Violencia Obstétrica*, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, México, consultado el 19 de mayo de 2024 en http://www.conamed.gob.mx/cmam/pdf/violencia_obstetrica.pdf

Secretaría Técnica del Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, *Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género*, 2021 Consultado el 10 <https://www.um.es/documents/2187255/2187771/glosario-terminos.pdf/34c77283-cc4c-44b9-9fc5-09142baf9386>

Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social, “*Ley Ingrid sanciona filtración de imágenes de víctimas; no es una mordaza para periodistas*”, Sánchez Cordero, Número 093, 15 de septiembre de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/6779-ley-ingrid-sanciona-filtracion-de-imagenes-de-victimas-no-es-una-mordaza-para-periodistas-sanchez-cordero#:~:text=La%20presidenta%20de%20la%20Comisi%C3%B3n,im%C3%A1genes%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia>

Senado de la República Coordinación de Comunicación Social , *Pleno del Senado aprueba “Ley 3 de 3” remite el documento a las legislaturas estatales*, Número 1305, 28 de abril de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en

<https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/5878-pleno-del-senado-aprueba-ley-3-de-3-remite-el-documento-al-ejecutivo>

Senado de la República, *Registro de deudores alimentarios deberá operar en marzo de 2024, señala estudio del IBD*, Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, 13 de agosto de 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/6488-registro-de-deudores-alimentarios-debera-operar-en-marzo-de-2024-senala-estudio-del-ibd#:~:text=estudio%20del%20IBD-,Registro%20de%20deudores%20alimentarios%20deber%C3%A1%20operar%20en,2024%2C%20se%C3%B1ala%20estudio%20del%20IBD&text=La%20medida%20surge%20de%20una,ni%20tramitar%20licencias%20de%20manejo>

Torres A., *Feminicidio (asesinatos a mujeres): definición, tipos y causas*, Barcelona, 2017, en <https://psicologiyamente.com/forense/feminicidio>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (s.f.). *Glosario de términos sobre género y derechos humanos*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021 Consultada el 20 de noviembre de 2023 en: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/2_genero/13.pdf

Valencia I. et. al., *La violencia vicaria y sus lagunas legales*, UNAM Global TV, México, noviembre 2023, consultado el 23 de julio de 2024 en https://unamglobal.unam.mx/global_tv/la-violencia-vicaria-y-sus-lagunas-legales/

Vianey Mejía, *Cinco datos que debes saber sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, México, consultado el 26 de febrero de 2024 en <https://coordinaciongenero.unam.mx/2022/02/cinco-datos-que-debes-saber-sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/#:~:text=En%202007%2C%20feministas%20mexicanas%2C%20entre,ejercida%20en%20todas%20sus%20formas>

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

Almanza E., *Ley Ácida: Esto sabemos de la nueva reforma aprobada en Puebla*, El Financiero Sección Estados, 02 de marzo de 2023, consultado el 8 de marzo de 2024 en <https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/03/02/ley-acida-esto-sabemos-de-la-nueva-reforma-aprobada-en->

[puebla/#:~:text=El%20pleno%20del%20Congreso%20Local,los%2040%20a%C3%B1os%20de%20prisi%C3%B3n](#)

Barragán Almudena, “*Ley Monzón, Puebla se convierte en el primer Estado en quitar la patria potestad a los feminicidas*”, El País, 2 de marzo 2022, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://elpais.com/mexico/2023-03-02/ley-monzon-puebla-se-convierte-en-el-primer-estado-en-quitar-la-patria-potestad-a-los-feminicidas.html>

Camacho M., “*Avanza la Ley Monzón en 17 estados del país, de los cuales en cuatro ya se aprobó*”, La Jornada de Oriente, México, 7 de agosto 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/avanza-ley-monzon-en-17-entidades-federativas-del-pais/>

Cobo Armijo, M. F. et. al., *La violencia obstétrica y las normas oficiales mexicanas: Una oportunidad para mejorar la implementación desde las violaciones reportadas por el personal de cuatro hospitales generales de la Ciudad de México*, México, Jurídica Ibero, 2023, año 7, núm. 14, enero-junio, p. 17.

Chávez P., “*Ley Malena, en búsqueda de un castigo para los agresores con ácido*”, Gaceta UNAM, México, 9 de marzo 2023, consultado el 08 de marzo de 2024 en <https://www.gaceta.unam.mx/ley-malena-en-busqueda-de-un-castigo-para-los-agresores-con-acido/>

García, Ana Karen. (2018, 20 de noviembre). 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. El Economista, consultado el 19 de mayo de 2024 en <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-de-genero-14-de-los-25-paises-del-mundo-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina-20181120-0048.html>

García Tovar, Frida Alexandra, *Violencia de género: de 1521 al día de hoy*, Revista abogacía, diciembre 2021, consultado el 29 de enero de 2024 en <https://www.revistaabogacia.com/violencia-de-genero-de-1521-al-dia-de-hoy/>

Mujeres en Red, *¿Qué es el feminismo?*, Mujeres en Red, El periódico Feminista, consultado el 25 de enero de 2024 en <https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1308>

Yáñez B., *Ley Sabina: así funcionará el registro nacional de obligaciones alimentarias*, Expansión, 28 de marzo 2023, consultado el 24 de marzo de 2024 en <https://politica.expansion.mx/sociedad/2023/03/28/ley-sabina-que-es>